

BOLÍVAR

ARRASADO

AGOSTO 2019

**"HE DEJADO DE COMPRAR
COMIDA PARA COMPRAR
GASOLINA"**

**LA SALUD DE LOS BOLIVARENSES
ES SOLO UN MILAGRO
DEL CIELO**

**EJECUCIONES Y DESAPARICIONES:
"LA LOCURA EN BOLÍVAR
FUE ESPELUZNANTE"**

**ESE ORO QUE ALIMENTA
LA VIOLENCIA CONTRA
LA MUJER**

**RIQUEZA Y DOLOR
EN UNA SOLA REGIÓN**

EDICIÓN BOLÍVAR

AMNISTÍA
INTERNACIONAL





CAROLINA JIMÉNEZ

DIRECTORA ADJUNTA DE INVESTIGACIÓN DE
AMNISTÍA INTERNACIONAL PARA LAS AMÉRICAS

SIN IMPORTAR CUAN OSCURA SEA LA CRISIS, NO CALLAREMOS

Los aeropuertos de un país, en especial aquellos que conectan a sus capitales con el resto del mundo, son la primera mirada a la ciudad y al país que nos espera después de que pasamos las puertas de migración y aduana. Representan la primera impresión y el primer contacto de quien aterriza en un lugar, cualquiera sea el motivo de la visita. Los venezolanos, ahora esparcidos por el mundo en un éxodo forzado al que apenas empezamos a “acostumbramos”, entramos –cuando lo hacemos por vía aérea- por el “Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía” o, como simplemente le llamamos para resumir un nombre tan largo: “por Maiquetía”.

Llegué a Maiquetía hace un par de meses como he llegado en los últimos años: con una maleta cargada de medicinas. Atrás han quedado los regalos que antes traíamos para nuestras familias. Ahora suplimos necesidades, no regalamos objetos representativos de los lugares que nos han acogido.

Al bajar del avión me llevé un shock en un aeropuerto internacional: lo sentí oscuro. De hecho, para ser más precisa: lo sentí intermitente. Un grupo de luces en el techo prendían, se apagaban inmediatamente y luego volvían a prender en uno de los largos pasillos que conducen al aérea de migración. La mayoría de los pasajeros, como yo, caminaba en silencio tratando de entender cómo un aeropuerto internacional puede permitirse tener dañado su sistema eléctrico. Al llegar a la zona de migración sentimos el calor propio del Caribe. Los aires acondicionados funcionan a media marcha o no funcionan. Salir de Maiquetía para llegar a Caracas implicó nuevamente más oscuridad, esta vez la de la autopista poco iluminada que lleva a la capital. Desde el momento mismo del aterrizaje, quien llega a Venezuela comienza a percibir la oscuridad que ahora arropa a casi un país entero.

Quienes viven en Caracas a menudo comentan que su “vida es un poco más fácil que la de la gente que vive en el interior” (i.e. en las ciudades y provincias no capitalinas). Lo dicen por que la falta de servicios públicos (agua, electricidad, gas, entre otros) se ha vuelto aguda e invivible en muchos lugares fuera de Caracas. Las noticias internacionales con frecuencia reportan los “mega apagones”, aquellos que implican falta

de electricidad simultáneamente en todos los estados/provincias del país, usualmente por períodos que van desde 12 horas hasta 4 días.

Si bien, nadie puede negar lo trágico y dramático para una población el hecho de experimentar una falla eléctrica de tal magnitud que sumerja a un país completo a la oscuridad por varios días, es imprescindible visibilizar la realidad de las distintas regiones de Venezuela que día a día viven fallas locales, en muchos de los servicios básicos, que de igual modo tienen un impacto alterador en la vida de las personas, ya que les arrebatara algo elemental para cualquiera: la posibilidad de planificar y vivir con un mínimo de certidumbre.

Esta serie de Amnistía Internacional Venezuela busca seguir contribuyendo a visibilizar la tragedia de quienes, a pesar de la resiliencia y las luchas personales y colectivas, siguen sufriendo la crisis de los servicios públicos en Venezuela, en el entendido de que la crisis de tales servicios no es una coyuntura particular. Es una crisis dentro de una crisis más profunda: la vulneración de derechos humanos que envuelve a cada venezolano en su vida diaria, para el que se encuentra en el país como fuera de él.

Después de unos días en Caracas, en donde obviamente experimenté falta de agua, bajones de electricidad, avenidas oscuras, etc., viajé a tierras llaneras a visitar a mi familia. Llegué a casa con la ilusión de toda persona que viene de lejos a visitar a los suyos: a comer la comida que sientes que “sólo te puede preparar tu familia”. Me sentí ilusionada en la mesa y de pronto nos quedamos todos a oscuras. Lo que planeábamos fuera un reencuentro familiar se convirtió, en cuestión de minutos, en una búsqueda apresurada de velas, fósforos, linternas y hasta

repelente para los mosquitos que pronto invadirían la casa ante la falta de ventilación.

La comida terminó rápido. La alegría del reencuentro terminó rápido. Nos sentamos en el pequeño patio de mi casa a intentar evadir la angustia que producen 38 grados centígrados sin ventilador y la incertidumbre de no saber por cuánto tiempo te quitan sin ningún aviso un servicio vital para el funcionamiento normal de cualquier familia. Pensé en la semántica misma de lo que implica la luz, el agua, el gas, llamados servicios “básicos” justamente porque los consideramos esenciales para la subsistencia humana y, sin embargo, Venezuela se ha convertido en un país en donde con frecuencia se priva a la población de ese disfrute necesario.

Pensé también en la forma diferenciada en la que vivimos la tragedia que envuelve el país: ¿Cómo comprende un niño o una niña la falta de electricidad?, ¿cómo lo vive mi madre cuyo deterioro cognitivo no le permite comprender por qué esta situación sucede? Ella, a su manera, demuestra su incomodidad por el calor o por la falta del agua fría que prefiere tomar dadas las altas temperaturas de donde vive. En este momento tenemos, como país, muchas más preguntas que respuestas y muchas más necesidades que soluciones.

La crisis de derechos humanos que afecta a Venezuela traspasó las fronteras desde hace varios años. La salida de millones de refugiados venezolanos a países vecinos, sumado a la posible comisión de crímenes de lesa humanidad, como lo documentó Amnistía Internacional en mayo de este año, han hecho de la situación venezolana una crisis global. Con más de 4 millones de venezolanos viviendo fuera de Venezuela, con al menos 7 millones de personas dentro del país en necesidad de asistencia humanitaria y con un cúmulo de graves denuncias de violaciones a los derechos fundamentales en las principales instancias internacionales, incluyendo el informe presentado por Michelle Bachelet, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en julio de este año frente al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, muestran la preocupación generalizada de la comunidad internacional sobre el país. Del informe de la Alta Comisionada vale destacar el párrafo 12 con respecto a la situación de los derechos económicos, sociales, culturales:

El desvío de recursos, la corrupción y la falta de mantenimiento en la infraestructura pública, así como la subinversión, han tenido como resultado violaciones al derecho a un nivel adecuado de vida, entre otros, debido al deterioro de servicios básicos como el transporte público y el acceso a electricidad, agua y gas natural.

A pesar de la documentación de graves violaciones cometidas contra la población y la evidencia abrumadora que demuestra que Venezuela vive una profunda crisis de derechos humanos, la administración de Nicolás Maduro ha optado por seguir negando la existencia de la crisis. Tal negación solo contribuye a perpetuar una crisis que continúa socavando los derechos fundamentales y los proyectos de vida de las personas.

La llegada reciente de cargamentos de ayuda humanitaria al país son pasos en la dirección correcta y pueden auxiliar al deteriorado sistema sanitario nacional. No obstante, la magnitud de las actuales necesidades humanitarias requiere sin duda de esfuerzos mucho mayores ante el reto de confrontar la emergencia humanitaria. En paralelo, el colapso de los servicios básicos, producto del desvío de recursos y falta de mantenimiento, entre otras causas, según señala el informe de la Alta Comisionada, amerita de soluciones urgentes en los que probablemente también se haga necesaria la cooperación internacional y se requiera del esfuerzo colectivo de todos los actores sociales y políticos del país.

Pasé varios días con mi familia compartiendo la angustia de los apagones intermitentes que duraban horas e intentando poner buena cara ante la falta de agua que debería venir casi inmediatamente después de un apagón y que en la realidad permanece ausente sin importar la inclemencia del calor, la agresividad de los mosquitos y la imperiosa necesidad de que podamos disfrutar de nuestros derechos fundamentales.

Me despedí desde el Aeropuerto Internacional Arturo Michelena que opera desde la ciudad de Valencia y que nuevamente me recordó cómo la falta de electricidad impacta las cosas mínimas que usualmente damos por hechas cuando viajamos: la seguridad de un aeropuerto depende en gran parte de su capacidad eléctrica, las máquinas del escáner para identificar el pase de abordar, los rayos X que inspeccionan el equipaje, y hasta las bocinas que anuncian el próximo vuelo y permiten un manejo ordenado de los pasajeros. Todo estaba a media marcha en el aeropuerto internacional de un país suramericano. Todo estaba un poco a oscuras, como el resto del país. En definitiva, la oscuridad se convierte en una cruel metáfora de una crisis que se ha vuelto permanente en la vida de millones de personas y que requiere medidas urgentes y justas por el bien de todos.

Créditos

Redactores y colaboradores

Andrea Pacheco

Andrea Salas

Carolina Jiménez

Daniela Damiano

Gabriela Buada Blondell

Gladylis Flores

Jäckeline Fernández

Karla Ávila Morillo

Luis Alvarenga

Marcos David Valverde

Edición y corrección

Daniela Damiano

Diseño y Diagramación

Nahomi Cabrera

Ilustración e infografía

Raymond Torres

Fotografía

William Rafael Urdaneta

Marcos David Valverde

Cortesía

Correo del Caroní

Kapé Kapé

La Razón

Shutterstock

Amnistía Internacional no comparte necesariamente las opiniones expresadas en los artículos firmados, ni las afirmaciones de las personas entrevistadas.

Amnistía Internacional, fundada en 1961 y presente en más de 150 países y territorios, es un movimiento que trabaja con total independencia política y económica.

Puedes encontrar campañas, llamados a la acción y noticias sobre el trabajo de Amnistía Internacional en amnistia.org

SUMARIO

- 5** CONTEXTO ESTADO BOLÍVAR
COLECCIÓN DE ARTÍCULOS
- 6** “HE DEJADO DE COMPRAR COMIDA PARA COMPRAR GASOLINA”
Marcos David
- 9** BOLÍVAR: PENURIAS DE UNA ZONA RICA
Karla Ávila Morillo
- 13** LA SALUD DE LOS BOLIVARENSES ES SOLO UN MILAGRO DEL CIELO
Gabriela Buada Blondell
- 19** LA CRISIS Y LAS MINAS SE LLEVAN AL FUTURO DEL PAÍS
Luis Alvarenga
- 24** EJECUCIONES Y DESAPARICIONES: “LA LOCURA EN BOLÍVAR FUE ESPELUZNANTE”
Luis Alvarenga
- 27** “DA PENA DECIR QUE SOY TRABAJADOR DE UNA EMPRESA BÁSICA”
Gladylis Flores
- 29** ESE ORO QUE ALIMENTA LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER
Jäckeline Fernández
- 32** INDIFERENCIA Y CORRUPCIÓN AMENAZA SUPERVIVENCIA DE PUEBLOS INDÍGENAS EN BOLÍVAR
Daniela Damiano
- 35** VIOLENCIA CRIMINAL Y DE ESTADO CONTRA LAS MUJERES INDÍGENAS AL SUR DEL ORINOCO
Andrea Pacheco

CRISIS EN BOLÍVAR NARRADA DESDE SUS VÍCTIMAS

El estado Bolívar, a pesar de ser el más extenso y el sexto más poblado de Venezuela, se encuentra en el olvido y sus habitantes sufren cada día los estragos de esa desatención. En esta revista se recopila una serie de artículos y testimonios que describen el impacto de la crisis masiva de derechos humanos que atraviesa Venezuela en situación humanitaria, que aunque viven en una tierra rica en recursos naturales, minerales y energía, los bolivarenses deben sortear grandes problemas como la escasez de combustible, falta de transporte, cortes eléctricos y los grupos que se han instalado en la zona, beneficiándose de operar en un territorio fronterizo con cuantiosos yacimientos de oro y minerales.

El proyecto estatal Arco Minero del Orinoco, situado al norte del Estado Bolívar, fue lanzado en el año 2016 para la extracción aurífera y de recursos minerales. Este proyecto ha sido denunciado por varias ONG, pueblos indígenas y diversos actores por su impacto ambiental, junto al incremento de la violencia entre grupos que luchan por el control de la extracción. Además, las organizaciones han realizado denuncias y alertas por la violencia contra comunidades indígenas y explotación sexual que afecta de forma especial y diferenciada a niñas y mujeres.

La escasez de gasolina es otro de los problemas de los que no escapan los habitantes del estado Bolívar, quienes deben hacer kilométricas colas de varios días para abastecer sus vehículos en las pocas estaciones de servicios que se encuentran abiertas. Muchos han denunciado que para que rinda el combustible solo permiten llenar entre 20 y 30 litros de gasolina. Las autoridades anunciaron en agosto de 2018 que la gasolina pasaría a venderse a precios internacionales para aquellos que no estuvieran registrados en el censo nacional de vehículos a motor. Casi un año después, este mecanismo no se aplica. La insuficiencia de combustible ha desencadenado una disminución en el transporte público y privado, lo que le impide a las personas movilizarse a sus lugares de trabajo o estudio.

También la producción, distribución y despacho de productos alimenticios y de primera necesidad se encuentra casi paralizada. El gas doméstico ha desaparecido en muchas localidades y en otras llega de manera irregular a precio regulado. Habitantes de varios sectores del estado han denunciado que tienen meses sin

el servicio. Cocinar a leña ha sido la opción que han encontrado ante el deterioro del servicio. Las protestas por la normalización del servicio se multiplican en varios sectores. Los cortes en el servicio eléctrico, después del primer apagón nacional y del anuncio de un Plan de Administración de Carga que no se cumple, se han vuelto constantes y mantienen a la población en una sostenida incertidumbre que los hace interrumpir y replanificar sus rutinas.

Representantes del sector salud han denunciado que en los últimos meses se ha venido presentando en Ciudad Guayana una epidemia de amibiasis y hepatitis, cuya población más afectada es la de edad preescolar y escolar. Estas enfermedades están relacionadas con el consumo de alimentos o aguas contaminadas. En varios municipios el servicio de agua potable no llega a los hogares regularmente, y cuando aparece el vital líquido, llega amarillento y con arenilla. La malaria también es un grave problema en el estado. Más del 70% de los casos reportados en el país se encuentran en Bolívar. Los expertos atribuyen el repunte de los casos a la minería del oro y a la instalación del Arco Minero del Orinoco, esta actividad además contribuye a la exportación de la enfermedad a Brasil y Colombia. La corrupción generalizada y la falta de disponibilidad de medicamentos ha propiciado la venta ilegal de tratamientos antimaláricos y ha aumentado la emergencia sanitaria, según algunas ONG locales. La escasez nacional de insumos, medicinas y personal de salud ha afectado considerablemente la región, lo que ha provocado el cierre técnico y total de importantes centros de salud como el oncológico de Ciudad Bolívar y el pediátrico Menca de Leoni, centro hospitalario más grande del oriente del país.

El servicio de aseo urbano no funciona adecuadamente; sectores enteros sobreviven rodeados de montones de basura y escombros que no son recogidos, pueden durar días a la intemperie generando la proliferación de insectos y roedores. Lo mismo sucede en calles, avenidas y frente a establecimientos de consumo y venta de comida.

Agradecemos el esfuerzo de todos los periodistas, activistas y valientes personas que a pesar de sufrir todas las consecuencias que desencadena la falta de atención estatal en su región, ofrecieron su testimonio para visibilizar la situación de vulneración de derechos que viven.

“HE DEJADO DE COMPRAR COMIDA PARA COMPRAR GASOLINA”

UNO

Por **Marcos David Valverde**

Ciudad Guayana.- Los habitantes del estado Bolívar han sufrido por años la ausencia de políticas públicas que garanticen efectivamente el disfrute continuo de los servicios básicos. Los cortes eléctricos y del suministro del agua potable se hicieron una mala costumbre que nunca se atendió, después falló otro servicio que empeoró la situación: la escasez de gasolina.

¿Hay una fecha que se pueda señalar? Sí: 21 de abril de 2019. El lunes después de la Semana Santa. No es una fecha que marque, apelando a un lugar común, un antes y un después en torno de una crisis. Pues la crisis ya estaba. Pero sí fue la fecha a partir de la cual todos los factores que visibilizan esa crisis quedaron en un segundo plano y se movieron a las estaciones de servicio del estado Bolívar.

A partir de ese día de abril, los habitantes del estado fronterizo en el sur de Venezuela deben estar horas y, más recientemente, días para algo tan cotidiano como llenar el tanque de gasolina del carro.

¿Por qué no es un antes y un después? En el estado Bolívar esta no es la primera crisis que hay al respecto. A finales de 2016, cuando Nicolás Maduro prohibió la circulación del billete de 100 bolívares (una medida que generó saqueos en varias ciudades y pueblos de la región), los bolivarenses vivieron algo similar: las protestas y los toques de queda impidieron la entrada de las gandolas de gasolina. Entonces había que estar varias horas en una cola por gasolina.

No era, entonces, una crisis, sino la cotidianidad. Es eso lo que se vive hoy en todo el estado. Hasta ahora no ha habido una explicación estatal al respecto.

La vida de Ana Milena Castillo, de 43 años, ha cambiado desde hace nueve semanas. Sus rutinas se han trastocado. Su cotidianidad, distorsionado. Uno de los momentos más “absurdos”, como lo define ella misma, ocurrió entre el martes 11 y el viernes 14 de junio: todos esos días estuvo en una cola por gasolina.

Esa semana se implementó el plan anunciado por el gobernante regional, Justo Noguera Pietri, de vender gasolina de acuerdo con los números terminales de placas: los pares, lunes, miércoles y viernes. Los impares, martes jueves y sábado.

A ella le tocaba el miércoles 12. Por eso se metió en la cola de una estación de servicio desde el martes 11. Pero al día siguiente, cuando la cola avanzaba, le dieron la noticia: la gasolina se había terminado. No se amilanó y decidió, entonces, quedarse hasta el viernes 14 en la cola. Ese día, a las 10 de la mañana, pudo comprar gasolina: solo 30 litros.

“

Esto es horrible. El viernes, después de que pudimos echar gasolina al mediodía, tuve una sensación de ansiedad de salir corriendo.

Uno queda así como que ya se acabó todo pero también con la impresión de que te van a quitar el puesto.

Es algo absurdo, pero esos cuatro días, dejas tu casa, las mascotas... todo. Fue bastante traumático: el sol la lluvia, el calor. Gastar tus días para echar gasolina. Es no dormir a la hora que es, es no limpiar, es comer mal, es bañarse a deshoras porque estás todo el día en la fila. Y al final te ponen solo 30 litros de gasolina, que no duran nada”, lamenta.

Una de sus hijas, Camila, la acompañó en el transcurso de esos días. “Fue horrible e incómodo. Estar allí sin tener un baño, sin poder comer bien, con las moscas entrando en los carros. Ahora nos la pensamos para salir porque no queremos gastar gasolina”, dice.

En vista del fracaso de ese plan para controlar el desorden en el que se han convertido las estaciones de servicio y sus alrededores (algunas mediciones detallan que hay colas de más de dos kilómetros), Noguera anunció dos nuevos planes: el primero de ellos fue la prohibición de las colas entre las 6:00 de la tarde y las 4:00 de la madrugada. La segunda fue la venta de gasolina también por los números terminales de las placas pero ya no con la modalidad de pares e impares. Ahora es del 0 al 3 los lunes y los jueves; del 4 al 6, los martes y viernes; del 7 al 9, los miércoles y sábados.

Todo ha sido igual. Por eso, quienes no conciben la idea de pasar tres días en una cola han optado por recurrir a los revendedores, quienes cobran un dólar por cada litro de gasolina. Rosa Peñalver ha preferido pagar eso y sacrificar algunos gastos, como el de la comida.

SACRIFICAR LA COMIDA



“Hace 15 días compré 18 litros en 40 mil bolívares, y este fin de semana compré como 15 litros en 50 mil bolívares.”

“Lo hago porque no sé cómo meterme y a qué hora meterme en una cola. Lo que compro trato de estirarlo una semana o diez días.”

“En mi casa vivimos solo mi hijo y yo, pero no tenemos el mismo horario: en mi trabajo, de secretaria, entro a las 7:00 de la mañana. Él entra a clases a las 2:00 de la tarde. Por eso dejo de comprar comida para comprar gasolina. ¿Cómo hago?”

“Tengo que cumplir con el trabajo. Lo que dejo de comprar son las cosas para rellenar: queso, huevo, jamón. En la mañana y en la noche nos comemos una arepa sola con mantequilla”, explica.






Algunos prefieren no sacrificar la comida. Como Josefina Hernández, de 69 años y habitante de San Félix, quien a pesar de sus cálculos renales y de sus picos de tensión estuvo dos días en la fila:

“

Me metí el lunes, a las 5:00 de la mañana, y eché gasolina el miércoles a las 10:00 de la mañana. ¿Cómo hice? Me hice amiga de cuatro tipos allí, les ofrecí comida, me cuidaban el puesto, me veían el carro. Les llevaba café y agua y ellos, encantados de la vida, me cuidaban el puesto. Después, estuve todo el día en la cama, estropeada”.

Luego de nueve semanas en crisis, con las estaciones de servicio militarizadas y con asomos de represión no hay indicios de que las colas por gasolina van a terminar.

“

Una noche, la policía llegó y quería desalojarnos de la cola. Nos plantamos, hubo un forcejeo y ellos amenazaron con llevarse remolcados los carros. Le dijimos que iban a tener que llevarse 200 carros y fue así como nos dejaron tranquilos”, narra Carlos Ortiz, un profesor universitario que estuvo cuatro días en cola.

En el estado Bolívar, en la penúltima semana de junio, muchos esperan solo por el fin del año escolar para tener la certeza de que, al menos, no tendrán que gastar gasolina para llevar a los niños a las escuelas.

Otros miran con cierta envidia otros estados no afectados por la escasez de combustible. Pero recuerdan que acá no hay apagones. O no hay tantos. Como sí los hay en otras regiones.

Se resignan entonces a pensar que es la cuota que debe pagar el estado Bolívar. Y se resignan, también pensando, que no hay solución: la industria petrolera venezolana no garantiza soluciones. Las autoridades nacionales y estatales no garantizan soluciones. Cada quien, entonces, procura solucionar sus días. Es la era de la sobrevivencia en Venezuela.

BOLÍVAR: PENURIAS DE UNA ZONA RICA

DOS

Por **Karla Ávila Morillo**

El estado Bolívar vive una terrible situación que produce daños y pérdidas ambientales, económicas, sociales, materiales y humanas. Las necesidades han sobrepasado las capacidades de una región que antiguamente fue próspera.

Bladimiro Morillo, fundador y forjador de Ciudad Guayana, siempre comentaba sobre su llegada, hace más de cincuenta años atrás, a lo que hoy es Puerto Ordaz, la describía como un “gran monte” que gracias a la planificación de mano extranjera y criolla surgió de una selva lejana a la capital venezolana, llegando a ser referencia de desarrollo, productividad, planificación y urbanismo.

San Félix, aquel puerto que floreció gracias a las importaciones y exportaciones, a orillas de la confluencia de los ríos Caroní y Orinoco (Caronoco), fue la principal base económica entre 1865 y 1909, movimiento portuario que dio pie a un gran eje de producción minera y la llegada de Iron Mines of Venezuela y la Orinoco Mining Company.

En esta zona del sur del país se alcanzaron sueños a través de metas de producción logradas por las empresas básicas, fue la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) pilar que construyó una historia de toneladas métricas de minerales que colocaron a la nación a la vanguardia de la economía mundial.

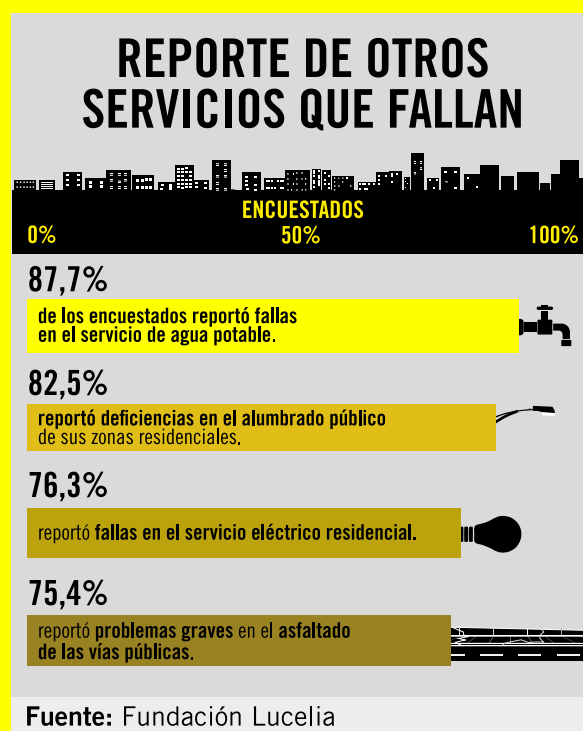
Actualmente, en el año 2019, el cambio es abismal, verdaderamente lo que ahora existe es una región deprimida, con corrupción y carencia en los servicios básicos.

Es allí donde apunta el foco, en la carencia de los servicios públicos mínimos que necesitan los individuos para vivir dignamente, situación que viola los derechos humanos de los ciudadanos y motivo por el cual se han

registrado más de nueve mil protestas en todo el territorio nacional, de las cuales un poco más de cuatro mil han sido por servicios básicos; según cifras del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social.¹

SERVICIOS INVISIBLES

En encuesta realizada a 114 habitantes del estado Bolívar, de los cuales 98 personas se ubican en Puerto Ordaz (86% de los consultados) se pudo constatar, según sus valoraciones, que 97,4% de los encuestados manifestaron fallas en el suministro de gasolina, un 93% en mal servicio del aseo urbano y 89,5% ha presentado problemas con el acceso a internet.



Un notable 70,2% califica negativamente el transporte público; un 68,4% tiene dificultades para obtener gas doméstico; al 68,4% le falla con alta frecuencia el servicio de telefonía celular de distintas operadoras, al igual que una representación del 67,5% no cuenta con telefonía fija de la estatal Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (CANTV) o le ha fallado el servicio en sus hogares; el 36% de los ciudadanos también reportan botes de aguas negras o servidas en la vía pública.

¹ OVC: Situación de la conflictividad en Venezuela en mayo de 2019 14.06.19 [en línea] <https://www.observatoriodeconflictos.org.ve/tendencias-de-la-conflictividad/mayo-culmina-con-1-541-protestas-en-todo-el-pais> Consulta del 16.06 al 22.06.19

“La carencia de los servicios públicos en la región ha afectado el modo de vida de sus ciudadanos; por ejemplo, el servicio de atención a emergencias 911 no funciona correctamente, el servicio policial igualmente, el de salud, el de gas doméstico, todos se han visto desmejorados”.

“Los servicios públicos son determinantes en la vida diaria de las personas, es por ello que un grupo de mujeres hemos creado este observatorio para monitorear esta problemática, porque requerimos del apoyo del ciudadano, que denuncie sus necesidades y podamos levantar información para atender dichas carestías”, indicó Aliana Estrada, coordinadora del Observatorio de Servicios Públicos en Guayana.

NO VEMOS LUZ

Existe la falsa creencia que en Ciudad Guayana nunca se va la luz porque aquí están las centrales hidroeléctricas que surten de electricidad a Venezuela, pero lo cierto es que en sectores como Nueva Chirica en San Félix, denuncian que hasta por veinte días consecutivos no hay energía eléctrica.²



² Diario Primicia: 20 días sin luz en Nueva Chirica [en línea] 20.06.2019. <https://primicia.com.ve/guayana/ciudad/20-dias-sin-luz-en-nueva-chirica/> Consulta del 16.06 al 22.06.19



ENTREN QUE CABEN CIEN

En las calles de Guayana se ve la anarquía en el servicio de transporte, se observan pocas unidades por las calles, todas ellas abarrotadas de personas, quienes antes de poder subirse a algún autobús, pasan hasta tres horas esperando para llegar a sus destinos.

A esto se le suman los atracos, tanto en las paradas como dentro de los vehículos, los altos costos de los pasajes, la interrupción de algunas rutas y la peligrosa improvisación ante el uso de las llamadas “perreras”, una suerte de cabinas en forma de jaulas andantes y los camiones de carga tipo volteo, cuya función verdadera es transportar materiales de construcción, que en el pasado han causado la muerte de pasajeros.³

Yoel Navarro trabaja en Puerto Ordaz, pero vive en San Félix. En varias oportunidades le ha tocado caminar más de 10 kilómetros para poder llegar a su hogar: “Mientras camino, voy rogando tener algo de suerte y que alguien compasivo se detenga para que me lleve hasta mi casa, a veces ocurren esos milagros, pero no siempre. Ese recorrido que normalmente hago en 15 minutos si voy en transporte, cuando lo hago a pie, puedo tardar hasta tres horas si le doy rápido”.

³ Transparencia Venezuela: En Ciudad Guayana el transporte es poco, caro y peligroso [en línea] <https://transparencia.org.ve/project/ciudad-guayana-transporte-poco-carro-peligroso/> Consulta del 16.06 al 22.06.19

GUILLOTINA QUE CERCENA LA EDUCACIÓN

El contexto educativo, muy poco mencionado ante la opinión pública, también se ve afectado en el ejercicio del derecho a la educación de niñas, niños y adolescentes, como consecuencia del funcionamiento deficiente del mismo, ante la complejidad de la realidad actual donde podemos encontrar escuelas con servicios básicos parciales o completamente ausentes.

Hay ausentismo escolar, lo que genera que el profesorado tenga que plantear nuevas estrategias para poder culminar el año escolar con una conquista medianamente aceptable.

Doris Guzmán, presidenta del Colegio Nacional de Profesores, seccional Caroní señala que existe un 50% de abandono en todos los niveles escolares.⁴

Además, padres, madres y representantes comentan sobre la insuficiencia de personal docente calificado, debido a que se han visto en la necesidad de migrar forzosamente fuera del país como consecuencia de la Emergencia Humanitaria Compleja que se vive en la nación, lo que genera baja calidad académica que a mediano plazo influye en alumnos con serias dificultades en sus nociones básicas al ingresar a niveles de educación superior, ya que no logran acabar el pensum completo que les permitirá avanzar correctamente en su aprendizaje, lo que a futuro será obstáculo en sus estudios universitarios.

CALIDAD DE VIDA O MUERTE

El sur de Venezuela se divide entre los que aman la región y apuestan a no dejar morir esta zona a punta de emprendimientos que nada tienen que ver con la minería; esas personas ponen en práctica la solidaridad, organización, perseverancia, disciplina y la tan aclamada resiliencia como valores para mejorar una sociedad que ha sufrido efectos demoledores de sus capacidades esenciales; por otro lado,

radicalmente opuesto, están los que crean conflictos de poder por el control de los recursos naturales y territoriales estratégicos, la violencia generalizada, corrupción, restricción de libertades e instauración de diversas mafias.

Alí Daniels, de la Organización No Gubernamental “Acceso a la Justicia” asevera: “Lo de los servicios públicos en Guayana parece una especie de apartheid económico y social, ya que el sufrimiento de las provincias venezolanas convierte a Caracas en una escenografía donde no pasa nada, donde todo está bien. Lo de Guayana no solamente es discriminatorio, como en el resto del interior del país, sino que pone en evidencia la perversidad de las autoridades, ya que se sacrifica a la mayoría del país para que Caracas mantenga la idea de fachada de un gobierno que viola constantemente los derechos humanos”.

La dinámica de vida en las regiones del país no es fácil, es tan compleja como en otras zonas fronterizas, el nivel de impacto regional ante las restricciones de los derechos económicos, sociales y culturales debilitan a todos los ciudadanos en distintos niveles de intensidad, pero los impacta por igual.

Se ha abierto una gran brecha entre los que tienen y los que no tienen, lo cual encumbra ambos extremos. En una misma calle se puede observar la discoteca de moda de la ciudad abarrotada de carros y a menos de cinco metros la existencia de una larga fila de más de trescientos vehículos que pasan hasta tres días para poder surtir de combustible, ese es el contraste que se vive en Guayana.

El defensor indica que “en Guayana se violan masiva y sistemáticamente los derechos humanos poniendo en riesgo la vida de los venezolanos.

⁴ Diario Primicia: 50% de ausencia en aulas por problemas de traslado [en línea] 16.06.2019 <https://primicia.com.ve/guayana/ciudad/50-de-ausencia-en-aulas-por-problemas-de-traslado/> Consulta del 16.06 al 22.06.19



↑ 2019 © Correo del caroní

“

Por ejemplo, ya tenemos denuncias visibilizadas por la Coalición de Organizaciones por el Derecho a la Salud y la vida “Codevida” de personas con alguna condición renal a los cuales no solo se les pide que lleven los insumos para hacerse la diálisis, sino que además lleven combustible para que las plantas que les dan electricidad a esos centros de salud puedan trabajar. La salud se ha privatizado, porque se ha puesto en los bolsillos de los usuarios la carga de su propia salud”.

Al sur del estado, lugar donde se ubican los municipios El Callao y Gran Sabana, cercanos a Brasil, la historia es igual o peor en cuanto a los servicios básicos, pero el tema del combustible, es lo que más afecta a los ciudadanos, ya que han llegado a pasar hasta siete días sin poder surtir a los vehículos en zonas como Tumeremo y Santa Elena de Uairén.

El abogado concluye que “en Bolívar, adicionalmente está la economía de la minería que ha convertido al resto de la población en rehén económico, en el sentido de que esa actividad ha trastocado los precios y valores de los productos, lo que hace que la carestía de la vida en la región sea mayor al resto del país porque el oro puede más que el Bolívar Soberano.

El mayor anhelo de los habitantes del estado Bolívar es que los servicios básicos mejoren, pero no dejan de denunciar el mal estado de sus calles, avenidas, el exceso de basura acumulada, zonas en penumbras, hogares sin gas ni internet.⁵

⁵ Diario Primicia: A la espera por servicios básicos en comunidades de Guayana [en línea] 31.01.2019 <https://primicia.com.ve/especiales/a-la-espera-por-servicios-basicos-en-comunidades-de-guayana/> Consulta del 16.06 al 22.06.19

LA SALUD DE LOS BOLIVARENSES ES SOLO UN MILAGRO DEL CIELO

Por **Gabriela Buada Blondell**

En el estado Bolívar la situación de salud es cada vez más grave. Sus habitantes se enfrentan a la reaparición de enfermedades que habían sido erradicadas, pero que están vinculadas a la explotación minera. También, al terror que sufre todo el que vive con alguna condición crónica de salud que no pueden ser tratada.

En Bolívar, los municipios Heres y Caroní concentran la mayor cantidad de población. Como en toda Venezuela, hablar del derecho a la salud en la actualidad, es tener que referirse a las múltiples denuncias de informes de organizaciones de la sociedad civil¹ que dan cuenta, del dramático retroceso en esta materia producto de una Emergencia Humanitaria Compleja que impacta a toda la población. Sin duda alguna, este derecho en específico ha sido vulnerado con mayor rudeza una y otra vez.

Lo que ocurre, en este sentido ha sido advertido desde instancias internacionales quienes catalogan toda esta situación como una catástrofe inmensa (Banco Mundial, 2019); espiral de violencia sin fin (ACNUDH, 2018); entre los 15 países que vivirán las peores crisis humanitarias en este año (Europa Press, 2019) y que ocupa los primeros puestos en corrupción y falta de competitividad, con dramático desmoronamiento de la institucionalidad, la economía y el bienestar, sin que haya mediado una guerra (FMI, 2018).

Desde 2013, defensores del derecho a la salud y a la vida indicaban lo que hoy es una realidad y que las autoridades negaron para no atenderla. En ese momento, ninguna sanción económica se vislumbraba y también se estaba a tiempo de impedir lo que hoy vivimos, o al menos, responder rápidamente y garantizar la salud y la vida digna. Hoy la situación ha empeorado y son muchas las barreras que en este ámbito deben ser superadas.

Hospitales y ambulatorios ubicados en Ciudad Guayana han perdido sus capacidades para prestar servicios, muchas de las clínicas privadas de Puerto Ordaz cerraron como producto del severo declive de las empresas de suministro. Las condiciones del principal hospital de Ciudad Bolívar, Ruíz y Páez, son inhumanas sencillamente porque no hay insumos para operar y las vidas corren peligro inminente debido a la precariedad de ese recinto de salud.

¹ Agendavenezuela2030. Emergencia Humanitaria Compleja en Venezuela. Derecho a la Salud. Reporte del estado Bolívar. En línea diciembre 2018 <http://www.agendavenezuela2030.org/wp-content/uploads/Reporte-Bol%C3%ADvar-EHC-Derecho-a-la-Salud-Diciembre-2018.pdf>

Yamileth Hernández
cuenta cómo su hija
de 12 años contrajo

malaria: “Al principio los médicos no sabían cómo diagnosticar, son pocos los profesionales de la salud que trabajan en el hospital y la vieron al tercer día, cuando ya la fiebre había hecho que la niña convulsionara”.

La epidemia de malaria en Guayana se acrecienta y los químicos usados en la minería ilegal, tales como mercurio y cianuro, dejan graves consecuencias en mujeres jóvenes y, especialmente, en las embarazadas. El mercurio orgánico (metilmercurio) que se concentra en los peces de los ríos contaminados afecta a los embarazos. El mercurio pasa al feto dañando su sistema nervioso y cerebro. Los químicos en el cuerpo de las mujeres dan lugar a nacimientos de niños y niñas con graves deficiencias motoras, neuronales y cerebrales según lo indica el reporte de Emergencia Humanitaria Compleja del estado Bolívar realizado por organizaciones de derechos humanos.

Actualmente se han extendido progresivamente epidemias y enfermedades que habían sido erradicadas. Un retroceso que habla del colapso del sistema de salud nacional. La expansión de la malaria en Bolívar, sobre todo a partir del desarrollo del Proyecto “Arco Minero del Orinoco”, generan fuertes y graves implicaciones ambientales para los habitantes de la zona y la biodiversidad de la región, así como del progresivo desmantelamiento de la estructura de vigilancia control y tratamiento de la enfermedad desde el Ministerio de Salud.

Denuncias en reiteradas oportunidades advertían que la malaria, el sarampión, la difteria y el paludismo se han diseminado desde el estado Bolívar, producto de la explotación minera.

El programa de vigilancia, diagnóstico y control de la malaria se ha ido desmantelando poco a poco desde 2012, producto de toda la crisis política y económica” que sufre Venezuela, lo que ha “magnificado la epidemia de malaria de manera descontrolada”, así lo señala una investigación de la Universidad Central de Venezuela realizada por la doctora María Eugenia Grillet.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) reconoció la emergencia y dispuso apoyar a Venezuela junto a Nigeria, Sudán del Sur y Yemen que enfrentan una situación similar.

Al menos tres enfermedades que han regido en los últimos tiempos con más fuerza en la zona son el sarampión, la difteria y el paludismo.

Pareciera que se han diseminado desde Bolívar y esto se debe a la explotación de minería en el municipio Sifontes”, advirtió Manuel Guzmán, jefe de servicio de infectología del Hospital Vargas en Caracas.

TERAPIA INTENSIVA EN TODAS LAS ÁREAS DE LA SALUD

Jhonathan Castañeda es médico cirujano y cuenta que su experiencia profesional en Bolívar, específicamente en el Hospital Ruíz y Páez, es una pesadilla que se acentúa a medida que pasa el tiempo.

“

Hay déficit de todo, sobre todo de profesionales de salud y eso genera un grave problema porque hace que el colapso sea más rápido. En el hospital nos falta todo, y por ende, la afectación de la atención primaria en el área es imposible de maquillar”, lamentó el joven galeno.

El profesional comenta que en las clínicas pasa exactamente lo mismo y el derecho a la salud no está garantizado. Con dolor los médicos se enfrentan día tras día a una situación que nadie aguanta y que, muchas veces, se sabe que ocurre porque son las autoridades quienes quieren que sea así.



↑ © William Urdaneta

Las cifras no salen a la luz y es complejo acceder a ellas porque a muchos les interesa que esto sea así. La incidencia en VIH en el estado Bolívar es alta y eso es algo que ha ido creciendo como los casos de tuberculosis”.

Otro de los ejemplos, que ofrece el médico de las distintas situaciones de la Emergencia Humanitaria Compleja en esa región es justamente lo que pasan las personas que tienen que someterse a cirugías electivas (una histerectomía).

El paciente tiene que conseguir todo. Desde la gasa estéril hasta la solución que va a utilizar, incluso la anestesia necesaria para realizar la intervención. Esto hace que muchas personas no se traten porque no cuentan siquiera con los exámenes básicos para hacer la cirugía y origina que alguna condición que se podía evitar no se pueda tratar o se prolongue y por ello es que muchas personas mueren de causas prevenibles”.

El colapso sin precedentes influye considerablemente en el deterioro de la calidad de vida de los venezolanos y en el incremento de muertes por causas evitables, al ser ese, precisamente, uno de los efectos más duraderos de la crisis de salud en el país.

CAUTELARES INCUMPLIDAS

El primer beneficiario venezolano de una medida cautelar² otorgada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por no tener tratamiento para poder vivir, Johonnys Hernández, sabe que las sanciones económicas no son la causa de la desmejora de su estado de salud.

² Provea. CIDH adopta medida cautelar histórica a favor del derecho a la salud en Venezuela. En línea octubre 2017 <https://www.derechos.org/ve/actualidad/cidh-adopta-medida-historica-a-favor-del-derecho-a-la-salud-en-venezuela>



“

La medida cautelar no se cumplió. Al principio y por seis meses obtuve el medicamento, pero no fue porque hicieran la compra, sino que lo que me proporcionaron correspondía a personas con hemofilia de Ciudad Guayana. Es decir, me asignaban el medicamento que era de otra zona, para indicar que cumplían. Eso solo lo pudieron hacer por ese tiempo y no se cumplió lo que mandaba la medida”, dijo Hernández.

Desde el mes de diciembre está muy afectado y no solo por la falta de medicamento, sino también de alimentación. En enero Johnnys perdió el conocimiento por más de 15 minutos a causa de desvanecimiento por tener varios días sin comer ya que por tener hemofilia y no acceder a su tratamiento no puede trabajar, los sangramientos son prolongados y no puede valerse por sí mismo.

“

“Estoy muy afectado, no solo en la salud física sino en lo emocional. Yo mismo soy mi psicólogo y trato de mantenerme para no caer en depresión. Acción Solidaria me ha apoyado con alimentos y suplementos y con eso he podido sobrevivir. En este momento peso de 49 a 50 kilos y estoy débil. No es el deber ser el hecho que una ONG me ayude. Yo debería tener mi tratamiento y poder trabajar y mantenerme”.

Desde el área legal de Acción Solidaria se hace seguimiento a la situación de salud de Johnnys Hernández ya que evalúan exigir que se solicite al Estado el cumplimiento de la medida y que además se le otorgue una indemnización, debido a que no puede valerse por sí mismo a causa de una condición de salud perfectamente prevenible con una política que garantice medicamentos a la población.



↑ © Correo del caroni | Jhoalys Siverio

“Deben ser garantes de mi salud y por todos los daños que he sufrido merezco una indemnización económica porque no es posible que no se invierta en salud, pero sí en armas y en uniformes para los soldados. La gente muere y yo creo que deberían cumplir el mandato de la CIDH porque sin medicamentos yo estoy inutilizado e imposibilitado”, finalizó.

UNA EMERGENCIA SIN FIN EN EL ESTADO MÁS RICO DEL PAÍS

El gobierno venezolano está fallando en su responsabilidad de proteger a los ciudadanos, independientemente de su filiación política y esto lo sabe el mundo entero con la ola migratoria que se ha acentuado. En Bolívar la migración forzada es hacia Caracas, ya que muchas personas con alguna condición de salud se trasladan para salvar sus vidas.

“Entre los grupos más vulnerables se encuentran personas con enfermedades crónicas y graves, mujeres embarazadas y lactantes, recién nacidos, niños y niñas menores de cinco años, indígenas, adultos mayores, en situación de riesgo y con discapacidad. Al hospital Vargas de Caracas llegan para salvar sus vidas pero tampoco es mucho lo que aquí se puede hacer”, afirmó el doctor Manuel Guzmán.

Debido a la situación humanitaria, se ha visto muy afectada la atención médica y el suministro de combustible, ya que los cortes eléctricos dejan al estado sin servicios básicos, y esto continúa ocasionando muertes evitables y la aparición de las enfermedades erradicadas.

“

La escasez o inexistencia de medicinas y de atención médica en los servicios de salud públicos en Bolívar nos lleva a prácticas de época de las cavernas. Mujeres indígenas y niños afectados no tienen garantías de acceso a diagnósticos ni a tratamientos”, aseveró el médico.

El colapso de servicios básicos agrava los problemas de saneamiento de los centros de salud del estado y los hospitales no reciben agua de manera regular. Los cortes eléctricos constituyen un aspecto de enorme preocupación, ya que no cuentan con plantas para mantener encendidos equipos de soporte vital.

La ausencia de medicinas también ha obligado a los especialistas de las emergencias a asumir costos que no les corresponden. “Muchos de nosotros, que tampoco ganamos salarios dignos, corremos con los gastos de gasas, guantes estériles e inyectoras”, comentó el médico Jhonathan Castañeda.

Se debe exigir una solución inmediata y un espacio humanitario con apoyo internacional que ayude a atender la crisis hospitalaria para poder hacer frente a todas las situaciones de salud que dejaron de clasificarse entre graves, prevenibles o tratables para ser una catástrofe que se tiene que parar. La vida en Bolívar y en Venezuela es una ruleta rusa que en épocas de bonanza económica, ni en sueños se estimaba, que se atravesaría por algo similar. Las organizaciones de la sociedad civil tienen el papel fundamental de continuar documentando estos casos para que no se sigan repitiendo y el derecho a la salud sea posible nuevamente.

LA CRISIS Y LAS MINAS SE LLEVAN AL FUTURO DEL PAÍS

CUATRO

Por Luis Alvarenga



La crisis de derechos humanos, económicos, culturales, sociales y ambientales que sufren las personas en Venezuela se profundiza cada día, haciendo que la calidad de vida de los habitantes de las regiones del país se deteriore, llegando al punto de sobrevivir, más que de vivir.

La falta de agua potable, la cada vez mayor escasez de transporte público, alimentos, combustible, medicinas y hasta dinero en efectivo en el estado Bolívar, impide a las personas dedicarse a trabajar, estudiar o incluso mantener una actividad que le permita drenar el estrés generado por la situación del país.

John Castañeda (nombre ficticio para proteger su identidad) es docente en un colegio ubicado en Santa Elena de Uairén, la población fronteriza más grande y cercana a Brasil. En la institución se imparten clases tanto a jóvenes del pueblo indígena Pemón como a residentes de la comunidad.

El profesor destaca que antes de los apagones ocurridos en marzo de 2019, la comunidad estuvo medianamente protegida ante cualquier corte eléctrico, debido a la prioridad que se tenía en la venta de corriente a Brasil. Sin embargo, cuando se produjo el colapso en la Central Hidroeléctrica “Simón Bolívar” ya la zona estaba padeciendo otra calamidad.

“El apagón de marzo coincidió con una época de sequía y eso fue muy fuerte. Nadie tuvo agua, ni telefonía. Nosotros estuvimos en las escuelas, dimos clases con la luz del día porque tenemos una política de no interrumpir clases en la medida de las posibilidades. Sin embargo, en la comunidad no había agua y muchos alumnos y trabajadores del colegio no pudieron asistir”, recuerda Castañeda.

Además, el docente explica que la crisis económica que afecta a los venezolanos ha provocado otro fenómeno que cobra cada vez mayor impulso: la deserción escolar que, de acuerdo a varias ONG, en el país alcanza el 70%.¹

“Muchos alumnos están desertando, se van a las minas para rebuscar lo del día a día. Aquí la parte económica ha estado muy difícil”, destaca Castañeda.

De 700 alumnos que tiene en promedio la escuela, entre 6 u 8 se van a las minas por cada aula de clases, mayormente jóvenes inscritos en los años más altos para acompañar a sus familiares y tratar así de conseguir las “gramas” (minúsculas porciones de oro) que les permitan subsistir algunos días.


¹ El Universal: Docentes de Fe y Alegría advierten incremento en deserción escolar <http://www.eluniversal.com/caracas/35048/docentes-de-fe-y-alegría-advierten-incremento-de-desercion-escolar>

“Antes, alguien que iba a las minas y traía dos ‘gramas’ de oro hacía tremendo mercado, pero ahora con eso se come unos días nada más por el aumento de los precios de los alimentos”, explica el profesor.

El colegio en el que labora ha contado con alianzas para mantener un servicio de alimentación a los estudiantes, que pueda ayudar a que reciban almuerzos sanos pese a todo el esfuerzo que eso conlleva.

Nosotros tenemos una alianza con el Programa de Alimentación Escolar del Ministerio de Educación, pero estos años hemos tenido este servicio entre comillas. Este año recibimos a veces arroz, caraota o pasta. Solo una o dos cosas, porque no vienen las proteínas desde hace años”, señala.



↑  © Correo del Caroni

LOS NIÑOS NO ESCAPAN DE LA TRAGEDIA

Castañeda lamenta que muchos niños y niñas han ido o han sido llevados a la fuerza a las minas² para ser explotados sexualmente por dinero.³

Aquí hay casos bien fuertes de prostitución. Lastimosamente, hay que decirlo, muchas niñas y niños han sido llevados a eso”, denuncia Castañeda, quien además señala que las autoridades no permiten ni facilitan la información⁴ sobre casos de enfermedades por transmisión sexual en la zona, pese a los intentos de los docentes y Organizaciones de la Sociedad Civil por llevar a cabo acciones preventivas ante esta catástrofe.

² La Razón: “Prolifera la esclavitud infantil en las zonas fronterizas” <https://www.larazon.net/2019/07/prolifera-la-esclavitud-infantil-en-las-zonas-fronterizas/>

³ Crónica Uno: Estado venezolano ignora explotación sexual de mujeres indígenas en el Arco Minero <http://cronica.uno/estado-venezolano-ignora-explotacion-sexual-de-mujeres-indigenas-en-el-arco-minero/>

“De forma extraoficial se sabe que hay muchas personas con VIH, se habla de entre 80 y 200, que para esta comunidad es muchísima gente”, alerta.

La respuesta de las autoridades ante esta dramática situación es inexistente. No hay planes de prevención, se oculta la información oficial y se restringen las posibilidades de que las personas puedan buscar tratamiento en las ciudades brasileñas cercanas.

Castañeda recuerda que durante el cierre de la frontera a principios de 2019, cuando efectivos militares impidieron el paso de personas con algún tipo de patología y desde los hospitales se prohibió referirlos a otro centro médico en Brasil.

EL SILENCIO DE LA CRISIS

Venezuela ha sido reconocida en las últimas décadas como un ejemplo a seguir en inclusión para la educación musical, destacando al Sistema Nacional de Orquestas Infantiles y Juveniles como el modelo de enseñanza a cualquier persona que desee transformar su vida y la de los demás a través de la música.⁵

Sin embargo, la crisis de derechos humanos ha dejado salas de práctica y de concierto en silencio. Jorge Montero es Licenciado en Educación mención desarrollo cultural, Luthier del Sistema y profesor de fagot. Ha visto cómo los jóvenes han sido obligados a abandonar sus sueños por sobrevivir al día a día.

“En el Sistema Nacional de Orquestas, donde damos música y el taller de Luthier, ha habido demasiada deserción debido a que los altos costos del transporte impiden que los muchachos asistan con regularidad. ¿Cómo tienen para poder venir? A veces no pueden y tienen que caminar”, relata el profesor.

Las aulas donde Montero imparte clases, cuando pueden y asisten los alumnos, están ubicadas en Ciudad Bolívar, capital del estado homónimo, en un complejo denominado Centro Cultural Bolívar, que fue construido para este fin.

“La magnitud de los daños tras los apagones de marzo ha sido muy grande, ya que en la sede del Sistema los apagones causaron estragos. Se dañaron las bombas de agua y se ha eliminado parte del horario debido a la imposibilidad de estar tanto tiempo en las aulas y de mantener los baños operativos”, apunta Montero.

Antes que la crisis afectara todos los espacios de vida, los jóvenes podían recibir clases todos los días, pero debido a la falta de pagos a los docentes, las malas condiciones físicas y la escasez de transporte, los horarios se redujeron dramáticamente a solo pocas horas por día.

“La situación de los servicios educativos en el estado Bolívar ha decaído, debido a la alta deserción escolar y la irregular afluencia de los pagos. Hay muchos docentes que han emigrado debido a los altos costos de la vida”, lamenta Montero.

El profesor indica que fue a finales de mayo cuando se profundizó la escasez de combustible⁷ en la ciudad (pese a ser capital del estado y de estar en el país con mayores reservas petroleras del mundo). Esta situación obliga a flexibilizar el funcionamiento no solo del Sistema, sino de otras oficinas que se encuentran en el Centro Cultural Bolívar.

“Podemos decir que estamos completamente paralizados”, alerta el Luthier del Sistema de Orquestas de la ciudad.

Montero también lamenta que, debido a la crisis, toda posibilidad de enseñanza desaparece y “ahí entran otros factores perjudiciales para la formación de los niños. Sería un daño enorme a toda la sociedad”.

Sin embargo, ni Montero ni los profesores que quedan tienen intenciones de tirar la toalla en estos momentos.

“Las personas que seguimos creyendo en Venezuela debemos seguir llevando el trabajo así sea de corazón, porque no debemos dejar todo a manos de la política. Lamentablemente se está viendo ensangrentada la sociedad, debemos seguir luchando y dar lo mejor para continuar la marcha”, destaca.

¿UN FUTURO SIN LUZ?

Muchos estudiantes en Venezuela han tenido que dividir sus días en dos: una parte para trabajar y la otra para estudiar. Además desde hace algunos años se ha visto reducido el tiempo o enfoque en las clases⁸ debido a la necesidad de ayudar a la familia a conseguir agua, alimentos, hacer largas colas por surtir de combustible los vehículos o, incluso, comprar gas doméstico.

Endrich Guzmán es licenciado en Teología y estudiante de Derecho en la Universidad Gran Mariscal de Ayacucho, ubicada en Ciudad Bolívar, en donde alumnos y profesores han tenido que modificar la rutina de clases para poder adaptarse a la situación.

⁴ Panampost: Salud en Venezuela está en cuidados intensivos <https://es.panampost.com/josefina-blanco/2019/04/07/salud-venezuela/>

⁵ El Universal: Las semillas de El Sistema se dispersan por el mundo <http://www.eluniversal.com/entretenimiento/44041/las-semillas-de-el-sistema-se-dispersan-por-el-mundo#>

⁶ Fundación Musical Simón Bolívar: Niños y jóvenes de Ciudad Bolívar tienen una sede propia <https://fundamusical.org.ve/noticias/los-ninos-y-jovenes-de-ciudad-bolivar-tienen-una-sede-propia/>

⁷ Crónica Uno: Colas kilométricas, extorsión, y protestas: ocho semanas de escasez de gasolina en Bolívar <http://cronica.uno/colas-kilometricas-extorsion-y-protestas-ocho-semanas-de-escasez-de-gasolina-en-bolivar/>

⁸ El Nacional: Deserción estudiantil oscila entre 30% y 40% en las universidades http://www.el-nacional.com/noticias/sociedad/desercion-estudiantil-oscila-entre-las-universidades_268494

Yo estudio en el turno nocturno y por la inseguridad empezamos a salir más temprano y cambiamos los horarios de clases”, señala Guzmán, quien agrega que luego de los apagones registrados en marzo de 2019 la universidad ha tenido la intención de eliminar las clases en los horarios nocturnos, debido a la frecuente falta de energía eléctrica, inseguridad, escasez de agua y transporte público.

Además, la hiperinflación en la que se encuentra Venezuela (prevista en 10.000.000% para el 2019 según el Fondo Monetario Internacional⁹), disuelve el salario de los profesores, quienes han tenido que dedicarse a otras labores extraacadémicas que le permitan sostener sus hogares, lo que ha causado el abandono de los cargos.¹⁰

Guzmán señala que “la universidad ha pedido la presencia policial por el horario nocturno y nosotros hemos hecho presión para que no eliminen ese turno. Además, los profesores no quieren dar clases tan tarde por la inseguridad”.

Pese a estos problemas, el estudiante podía sortear los obstáculos mediante el uso del vehículo familiar. Hasta que llegó la crisis del combustible que lo ha obligado a ausentarse de las aulas para buscar no solo gasolina, sino también otros métodos para recoger agua potable, ya que con el automóvil solucionaba más rápidamente esta situación.

En este semestre me ha tocado dejar de ir a la universidad para poder conseguir agua para la casa, porque mi papá es una persona mayor y no puedo dejarle todo el peso a él”, relata Guzmán.

En un país con las condiciones de vida dignas, surtir gasolina no toma más de unos pocos minutos. Pero en Venezuela todo consume largas horas de las vidas de las personas. En el caso de Ciudad Bolívar, las filas se empiezan a organizar desde un día antes que llegue la gandola con combustible, si llega.

⁹ Univisión Noticias: 10,000,000%: el desmesurado aumento de la inflación que pronostican para Venezuela en 2019 <https://www.univision.com/noticias/crisis-en-venezuela/10-000-000-el-desmesurado-aumento-de-la-inflacion-que-pronostican-para-venezuela-en-2019>

¹⁰ El Impulso: El 50% de los docentes universitarios emigraron y la deserción estudiantil alcanza el 35% <https://www.elimpulso.com/2019/02/06/el-50-de-los-docentes-universitarios-emigraron-y-la-desercion-estudiantil-alcanza-el-35-6feb/>



“No me pudieron pasar buscando una noche a la universidad porque el carro iba a estar haciendo cola para surtir gasolina, porque aquí es por número de placa, pero cuando llego a la casa me dicen que perdieron el tiempo porque la bomba en donde estuvieron no tenía combustible”, comenta.

La consecuencia de este coctel de problemas se refleja en la deserción de estudiantes y el abandono de los cargos por parte de los profesores. “De mi grupo de amigos en la universidad se han ido 3, pero de los 50 estudiantes que comenzamos la carrera, este semestre no llegamos a 16”, apunta Guzmán.

Sin embargo, no todo está perdido. Todavía hay jóvenes que quieren resolver los problemas del país, que creen en él y luchan por sobrevivir a esta crisis de derechos humanos.

Yo quiero seguir estudiando mientras se pueda. Siga o no siga en la universidad, no tengo pensado irme del país, no tengo corazón para dejar a mi familia aquí en este problema”, concluye Guzmán.

EJECUCIONES Y DESAPARICIONES: “LA LOCURA EN BOLÍVAR FUE ESPELUZNANTE”

Por Luis Alvarenga

El 23 de febrero de 2019 era un día esperado por gran parte de la población venezolana, medios y organizaciones internacionales, ya que un sector político del país realizaría el ingreso de insumos humanitarios¹ a través de las fronteras con Colombia y Brasil.

La euforia generada con un concierto multitudinario en el paso fronterizo entre Cúcuta (Colombia) y el estado Táchira se extendió desde el 22 de febrero, cuando se realizó, hasta más allá del 23, día en el que se intentó ingresar material humanitario a través de los estados Táchira y Bolívar.

Sin embargo, desde esa fecha el infierno se desató en esa región. Marcos Rodríguez (nombre ficticio para proteger su identidad) es docente en una escuela de la mencionada ciudad, ha sido testigo de la barbarie cometida por efectivos de los cuerpos de seguridad del Estado y de civiles armados no identificados.

El gobierno venezolano ordenó el 22 de febrero el cierre de las fronteras² para impedir cualquier acción de la oposición y oficialmente reforzó la presencia militar en la zona, pero también llegaron muchos desconocidos.

“Aquí la lista de atropellos con el cierre de la frontera es inmensa, terrible. La locura aquí fue espeluznante y sacó la porquería más grande que había dentro de algunos seres humanos”, destaca Rodríguez.

El docente señala que muchas personas ajenas a las comunidades de Santa Elena de Uairén o las aldeañas fueron enviadas a la zona para amedrentar a quienes apoyaran el ingreso de estos insumos, pero la gravedad de la situación empeoró.

¹ Asamblea Nacional: Juan Guaidó: El 23 de febrero será el día del ingreso de la ayuda humanitaria a Venezuela http://www.asambleanacional.gob.ve/noticias/_juan-guaido-el-23-de-febrero-sera-el

² Venezolana de Televisión: Gobierno venezolano anuncia cierre de frontera terrestre con Brasil <http://vtv.gob.ve/cierra-frontera-terrestre-brasil/>

“Los autobuses amarillos, esos que se hacen llamar de Drácula, vinieron llenos de delincuentes y los metieron en el fuerte Roraima, uno los veía y no tenían actitud de militares”, relata Rodríguez.

MUERTES DURANTE MANIFESTACIONES EN EL ESTADO BOLÍVAR (ABRIL 2018- ABRIL 2019)

8 Personas murieron durante manifestaciones

1 Niño recibió un disparo durante protesta por agua en San Félix



Fuente: CODEHCIU

Ese 22 de febrero las redes sociales se llenaron de mensajes y videos mostrando lo que ocurría en una frontera cerrada y censurada. Grupos de indígenas cargaron estos productos y fueron reprimidos con gases lacrimógenos y armas de fuego.

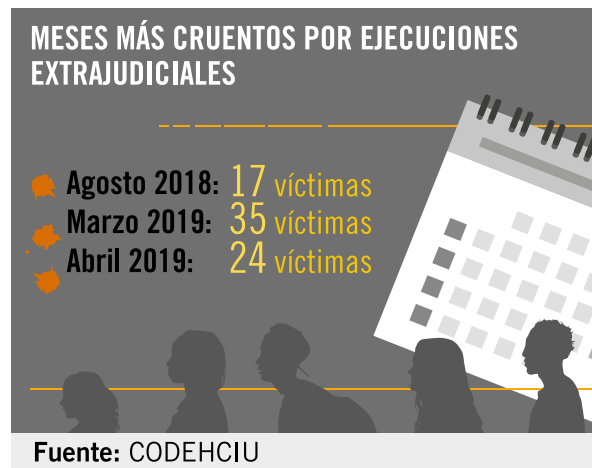
“

El día que entró la ayuda humanitaria estuve en la línea y después de ese día persiguieron a mucha gente, hay muchos desaparecidos y así han quedado, nadie sabe dónde están”, señala Rodríguez.



Las consecuencias de las acciones desmedidas del Estado no solo se puntualizaron en los días entorno al 22 de febrero, sino que se extendieron por más tiempo, como lo demuestra el Informe Anual del Monitoreo de Ejecuciones Extrajudiciales en el estado Bolívar (abril 2018 – abril 2019) del Comité por los Derechos Humanos y la Ciudadanía (Codehciu).

De acuerdo a Codehciu, el mes más cruento por ejecuciones extrajudiciales ha sido en marzo, con 35 casos registrados, seguido por abril con 24

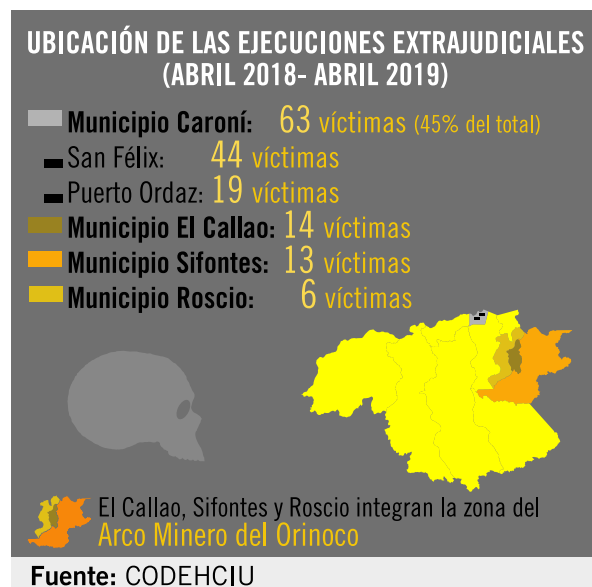


“Aquí había miles de efectivos militares y lo que se veía eran extorsiones por todos lados. En Santa Elena de Uairén se metían en los comercios, pedían lo que se les antojara y se iban”, enfatiza Rodríguez.

CRÍMENES SIN LUZ

En marzo de 2019 se produjo el apagón general más grande y prolongado en la historia de Venezuela, dejando sin electricidad a casi todo el país y el estado Bolívar no fue la excepción.

La paralización casi total del país no fue obstáculo para que los efectivos que deben proteger a los ciudadanos cometieran más violaciones a los derechos humanos. Codehciu señala en el Informe que solo en el municipio Caroní del estado Bolívar se cometieron 45% de las ejecuciones extrajudiciales, con 63 víctimas.



La ONG señala además que 78,57% de las víctimas de presuntas ejecuciones extrajudiciales fueron asesinadas a manos del CICPC, Ejército y Guardia Nacional Bolivariana, de acuerdo con testigos y reportes.

“

El docente bolivarense recuerda que “hubo una matazón de gente porque muchos de esos que vinieron en autobuses desertaron y después los buscaron. Hubo días que eran 4 o 5 muertos, incluso en una ocasión llegó a haber 9 muertos”.

RESPONSABLES DE LAS EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES (ABRIL 2018- ABRIL 2019)

78,57% de las víctimas fueron asesinadas a manos del CICPC, Ejército y Guardia Nacional Bolivariana

- CICPC: 60 ejecuciones
- Ejército: 32 ejecuciones
- GNB: 18 ejecuciones
- Policía del estado Bolívar: 7 ejecuciones
- Paramilitares: 6 ejecuciones
- Policías municipales: 2 ejecuciones
- Cuerpo de Investigaciones Policiales (CIP): 1 víctima

Fuente: CODEHCIU

Rodríguez añade que en la zona fronteriza del estado Bolívar y en las comunidades entorno al Fuerte Roraima se sabe de la comisión de torturas, golpizas, choques eléctricos a quienes fueron capturados durante los días posteriores al 23 de febrero.

“Ellos les decían a las personas ‘¿tú sabes todos los desaparecidos?, están ardiendo en esa candela’ y ponían una fogata al frente”, rememora con pánico el profesor.

Por su parte, Codehciu señala que 13 personas murieron entre abril de 2018 y 2019 dentro de las cárceles en el estado Bolívar, en donde las autoridades son responsables por la integridad, seguridad, salud y condiciones dignas de reclusión.

MUERTES EN RECINTOS PENITENCIARIOS (ABRIL 2018- ABRIL 2019)

13 personas murieron en las cárceles del estado Bolívar, de las cuales:

8 en calabozos del CICPC

2 en prisiones de la policía del estado Bolívar

2 en cárcel de El Dorado

Causas:

- Falta de atención médica por paludismo
- Infecciones
- Desnutrición
- Confrontación con otros reclusos
- Fuga del recinto carcelario

Fuente: CODEHCIU

El miedo de no saber qué podría pasar y qué ocurrió con las personas desaparecidas aumenta cada vez que se ven bandadas de zamuros en los alrededores del Fuerte Roraima, de donde Rodríguez ha observado columnas de humo en los días posteriores al 23 de febrero.

“

Ahora, la creencia urbana es que hay fosas comunes en la zona del fuerte”, concluye.

“DA PENA DECIR QUE SOY TRABAJADOR DE UNA EMPRESA BÁSICA”

Por Gladylis Flores

Ser trabajador de una empresa básica de Guayana, estado Bolívar, era sinónimo de estatus. La calidad de vida era superior a la de un empleado de la administración pública, por los beneficios que tenían gracias a las contrataciones colectivas de cada empresa. Pero esto cambió en los últimos años, cuando empezaron a incumplirse las cláusulas e inició la persecución a quienes reclamaran por ello.

Las empresas pertenecientes al holding de la Corporación Venezolana de Guayana actualmente no cuentan con un tabulador de cargos y hoja de cálculo, por lo que todos perciben el mismo sueldo, esto a raíz del aumento salarial tras la reconversión monetaria en 2018.

Esto desató una ola de protestas en la región por aproximadamente cuatro meses, lo que dejó como resultado el encarcelamiento de Rubén González, representante del Sindicato de Trabajadores de CVG Ferrominera, y quien lideró las protestas. Actualmente, se encuentra encarcelado en la cárcel de La Pica en el estado Monagas y enjuiciado por un tribunal militar.

Su familia ha denunciado ante distintos escenarios las condiciones en las que se encuentra el sindicalista. También fueron detenidos nueve trabajadores de la estatal del hierro y tres de CVG Venalum, junto al presidente del Sindicato Único de Profesionales del Aluminio (Sutrapuval), José Hidalgo. Todos por denunciar las violaciones a las contrataciones colectivas.

PERSECUCIONES A LOS TRABAJADORES

Además de las detenciones, las persecuciones no han cesado, la Intersectorial de Trabajadores de Guayana, una coalición de sindicalistas de las empresas estatales, han denunciado que algunos de sus integrantes sufrieron hostigamientos en sus puestos de trabajo.

Los más afectados son los dirigentes sindicales de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG), dirigida por Pedro Maldonado. Noel Hernández, director laboral de la CVG, fue despedido de su cargo; mientras que al Ramón Gómez, secretario general del Sindicato de Empleados Públicos de CVG (Sunep), le anunciaron una jubilación forzosa, es decir, sin haberse cumplido el tiempo de trabajo y la edad mínima para poder optar a las jubilaciones.

Desde que detuvieron a Rubén González comenzó la persecución mucho más fuerte contra todos nosotros, desde noviembre me dieron una calificación de despido que está ante la Inspectoría del Trabajo por reclamar nuestros derechos en la parte laboral”, explica Aristóteles Maneiro, quien tenía el cargo de supervisor en el área de operación de maquinaria pesada en la CVG.

El trabajador aseguró que la orden fue dada por el presidente de la Corporación luego de participar en una entrevista en una canal de televisión nacional en donde denunció las condiciones paupérrimas de las empresas básicas de Guayana.



↑ Correo del Caroni | Marcos Valverde

CALIDAD DE VIDA DIEZMADA

José Fermín –nombre ficticio- trabaja en CVG Ferrominera desde hace 34 años, está próximo a jubilarse, teme dar declaraciones por miedo a ser víctima de un despido o de alguna otra represalia en la empresa.

Comenta que para poder rendir el salario que recibe en la empresa que labora como personal administrativo debe vender helados, chupetas y hielo en su casa, junto a su esposa que también es empleada de la CVG.

El sueldo no nos alcanza para la canasta alimentaria, mucho menos para comprar ropa. Por eso tenemos que hacer maromas para completar y resolver, pero casi no comemos proteínas. Gracias a Dios mis dos hijos mayores se independizaron y solo somos tres personas en la casa”, detalla Fermín.

Aprendió a usar el transporte público nuevamente, porque desde hace dos años le robaron su vehículo y no ha podido comprar uno nuevo. Es por esto que muchas veces no puede ir a la empresa y queda excluido del beneficio de la bolsa de comida que es la que le permite completar el alimento de su casa.

Fermín considera que sus días se convirtieron en una supervivencia después de pasar los mejores años de su vida en la empresa, formar a sus hijos, viajar por toda Venezuela en las vacaciones y tener un seguro médico que le cubría todas sus necesidades.

Eso no era lo que esperaban los trabajadores después de pasar muchos años de su vida en una empresa. Es el caso de muchos jubilados, quienes tenían un plan distinto cuando llegara el momento de retirarse y disfrutar de sus últimos años.

“Mi plan de vida al jubilarme era comprar una casita en Caripe y hacer un curso de cocina para montar un restaurante. El dinero de la jubilación no me alcanzó ni para un buen mercado, ahora tengo que estar buscando medicinas todo el día y rindiendo el dinero para la comida”, relata Gloria Álvarez, jubilada de CVG Venalum.

La situación de los jubilados es parecida a la de los trabajadores activos, pues no reciben homologación de acuerdo al puesto de trabajo que tenían y todos reciben el salario mínimo nacional.

Los distintos sindicatos y la Intersectorial de Trabajadores de Guayana han denunciado las desmejoras de la calidad de vida, así como todas las persecuciones que han venido sufriendo en los últimos años. Sin embargo, muchos se mantienen en sus puestos de trabajo, a pesar de los amedrentamientos, trabajando por la recuperación del parque industrial de Guayana.

SIETE

ESE ORO QUE ALIMENTA LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER

Por Jäckeline Fernández



El Arco Minero del Orinoco fue creado oficialmente el 24 de febrero de 2016 como Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco. Abarca un área de 111 843,70 km², es decir 12,2% del territorio venezolano; duplicando a la Faja Petrolífera del Orinoco.

Varias organizaciones de derechos humanos, como el Programa de Educación Acción en Derechos Humanos (PROVEA), ha manifestado su rechazo a este proyecto debido a que viola el derecho a la consulta previa, libre e informada, a la inexistencia de un estudio de impacto ambiental, así como por la deuda que el Estado tiene con los pueblos originarios en materia de demarcación de los territorios.

A lo anterior se le suma la militarización de los territorios indígenas y la violación con el decreto del Arco Minero, al derecho al trabajo, ya que el gobierno se reserva las formas de contratación.

Las zonas mineras ubicadas en el sur del estado Bolívar se han caracterizado por la violencia. Si bien la mayoría del país desconocía lo que ocurría en esas zonas, la tristemente célebre “masacre de Tumeremo” visibilizó la actuación de los diversos grupos de poder que hacen vida en dichos territorios, el uso indiscriminado de armas y la ausencia de controles efectivos por parte del Estado.

Todos estos elementos se han venido manifestando ahora en otras ciudades del estado Bolívar. Y sus consecuencias se manifiestan de forma diferenciada.

La minería posee características muy marcadas de corte patriarcal y machista, donde las mujeres asumen roles bien específicos: cocineras, prostitutas o parejas de los mineros. En todos ellos, la violencia de género está presente, debido a que son espacios donde la ley es aquello que determina el grupo de control.

Cuando empezaron a aparecer cuerpos de mujeres envueltos en bolsas plásticas en la vía Uputa, se atribuyeron los femicidios a su relación con grupos de poder. Algunas voces señalaron que “habían hablado de más”. Lo cierto es que esas mujeres fueron asesinadas porque un grupo de hombres asumió que su poder sobre ellas les daba derecho de tomar sus vidas. Esos femicidios nunca fueron esclarecidos.

Es notable que los femicidios pasivos han venido incrementándose en el estado Bolívar, en la misma medida que la actividad minera se ha ido transformando en casi la única actividad económica para la mayoría de su población. Lo mismo ha ocurrido con la violencia sexual.

Los femicidios pasivos son aquellos ocurridos por abortos inseguros o clandestinos, mortalidad materna, prácticas dañinas (mutilación genital); vinculadas con el tráfico y trata de seres humanos, por la acción u omisión deliberadas por funcionarios públicos o agentes estatales y por las acciones de grupos delictivos o violencia armada generalizada.

Cuando leemos las reseñas de los medios de comunicación, los móviles manejados por los cuerpos de investigación apuntan hacia “venganza o presunto intento de robo”. Pero estas causas son absolutamente distintas entre sí y requieren un proceso de investigación diferenciado y con enfoque de género. Lo cual no ocurre. De allí la opacidad en cuanto a los datos que pudieran permitirnos comprender el fenómeno de la violencia de género en un contexto como el actual.

Más aún, la ausencia de mecanismos que permitan levantar datos oficiales sobre las manifestaciones de violencia que afectan a niñas, adolescentes y mujeres en el contexto minero, incumplen los compromisos suscritos por el Estado y atentan contra la posibilidad de diseñar políticas públicas destinadas

a erradicar las causas subyacentes de este tipo de violencia.

Las niñas y adolescentes que deben movilizarse hacia las zonas mineras, ya sea solas o acompañadas por familiares, se ven expuestas a una realidad signada por el machismo y el ejercicio de un poder que se afirma a través del sometimiento de otros, usando la violencia y el miedo como instrumentos.

Si la violencia contra la mujer sigue considerándose un asunto “privado” en ciertos espacios, al trasladarse a zonas mineras no se trata solo de una manifestación normalizada entre parejas, sino de un privilegio asociado al ejercicio del liderazgo temporal de quien tiene las armas.

La ONU ha señalado que cuando la violencia armada es generalizada, la violencia de género se incrementa. Porque las armas también son un privilegio de los hombres.

Las condiciones sanitarias de las zonas mineras son otro elemento de riesgo para las mujeres. La mayoría de estos campamentos se circunscriben a tiendas hechas con palos de madera y bolsas negras.

No hay acceso a agua potable ni espacios seguros para la higiene del cuerpo. Las mujeres son expuestas a la violencia sexual de manera cotidiana. Normalizada de esta forma, la explotación sexual y la prostitución forzada son manifestaciones rutinarias asumidas como parte del precio a pagar por la subsistencia.

La cultura de la violencia imperante en las zonas mineras se ha trasladado a la ciudad. Y todas sus expresiones de poder y subyugación desarrolladas y aceptadas por el Estado y la sociedad, han comenzado a afectar nuevos espacios, impulsadas por la ausencia de políticas de desarrollo, el colapso de la industria del hierro y la emergencia humanitaria compleja. Bolívar es una mina... pero no de oro.

MUJERES VÍCTIMAS MÁS ALLÁ DE LAS MINAS

En agosto de 2014 una joven fue asesinada en un terreno baldío de una urbanización llamada Villa Betania, en Puerto Ordaz. Ocurrió en la madrugada, y frente a su pequeña hija, después de ser “ruleteada” por varios sectores de la ciudad por sus victimarios, presuntamente para buscar el dinero que su pareja, asesinado meses antes, tenía guardado.

Unos meses antes, los cuerpos de tres jóvenes fueron hallados con signos de tortura, en la vía Upata, envueltos en bolsas plásticas.

En cada uno de esos casos la opinión de la gente produjo una inmensa zozobra: ellas se lo buscaron, andaban con hombres equivocados, nadie las manda...

Todas esas muchachas (ninguna era mayor de 30 años) habían mantenido relaciones sentimentales con hombres asociados a grupos delincuenciales. Todas habían sido asesinadas por esa relación, como un acto de venganza de grupos rivales.

Esos femicidios perturbaron mi conciencia y me hicieron ver un lado de la violencia armada que solo conocía por las terribles historias de países como México, Colombia, Guatemala y El Salvador.

Sabía que las cosas estaban cambiando, que en este estado donde se construyó la más importante ciudad planificada del país, considerado un polo de desarrollo preponderante, se habían abierto grietas profundas que estaban permitiendo emerger un modo inédito de violencia.

Pero las mujeres seguían siendo víctimas silentes, no solo de quienes eran sus victimarios directos, sino también de la indiferencia de la sociedad. Porque no son tantas, porque eso de “femicidio” aún no lo digiere ni siquiera las mismas autoridades que deben hacer cumplir las leyes, porque en otros países hay más mujeres muertas...

Y me sentía impotente, porque para mí una vida vale tanto como mil vidas. Porque una mujer muerta no es solo ella: también son sus hijos e hijas, si los tiene. Pensaba en Atlimar, la joven asesinada frente a su hija, y apenas podía imaginar la increíble angustia que debió sentir cuando supo que perdería la vida ante los ojos de la niña, y que ella quedaría sola en manos de los asesinos de su madre. ¿Quién le borraría de la memoria esa imagen?

La violencia debe alcanzar niveles de pandemia para que las mujeres comiencen a ser víctimas recurrentes, y eso está ocurriendo ahora mismo en Bolívar. Las masacres en las zonas mineras - de las que se sabe, porque la violencia silencia muchas-, son apenas un esbozo del escenario que recorren miles de niñas, adolescentes y mujeres en procura de tener una vida

normal. Las características de este estado son distintas, debido primordialmente a las actividades mineras y todos los tipos de violencia derivadas de la ausencia de control, el fracaso de las políticas públicas en materia de seguridad y la normalización de la violencia en este contexto de emergencia humanitaria compleja.

Y en un contexto como este, urge que entendamos la necesidad de obviar números y privilegiar vidas. Una vida no es un número, sino miles de números, miles de sumas y restas, de multiplicaciones y fracciones, de ecuaciones que transforman otras vidas, que construyen espacios, que transforman el mundo.

La violencia armada tiene un mayor porcentaje de víctimas masculinas, de jóvenes que se convierten en datos alarmantes. Y esa alarma parece minimizar otras. Pero están allí, a veces escondidas en noticias sobre otros casos, a veces solo comentadas en los buses o bodegas. Porque no tienen esa característica necesaria para convertirse en noticia: no son muchas.

Tal vez para quienes necesiten cantidades para justificar sus actos, 54 mujeres asesinadas en un año, 42 de ellas por causas asociadas a grupos mafiosos, delincuenciales o acciones de funcionarios del Estado, no sean suficientes.

Pero yo recuerdo sus nombres, o el hecho de que no fueron identificadas. Recuerdo a Marisol, Liskeydi, Yenitza, Angela, Atlimar, Zoraida, Rosa, Yolianny, Rebeca, Yangeliz, Andreilis...halladas bajo un puente, en las vías, en una carretera, en el rio...

Y no puedo dejar de escribir, de hablar, de sentir que debemos asumir una postura más clara sobre un monstruo que crece bajo la sombra de la indiferencia.

Por eso en cada espacio en el cual tengo la oportunidad, las menciono, las recuerdo.

Ellas son las memorias que estoy guardando de este periodo triste de nuestra historia, las que me dicen que el silencio es cómplice de la injusticia.

¡No pienso callarme!

INDIFERENCIA Y CORRUPCIÓN AMENAZA SUPERVIVENCIA DE PUEBLOS INDÍGENAS EN BOLÍVAR

Por Daniela Damiano

Las comunidades indígenas en Venezuela de por sí han estado históricamente relegadas al olvido por parte de las autoridades; actualmente y en medio de los estragos que produce la emergencia humanitaria compleja, su supervivencia es casi un milagro.

Situaciones tan básicas como poder movilizarse desde sus comunidades a la ciudad, recibir atención médica de calidad o simplemente adquirir alimentos o sembrarlos en sus propias tierras, se ha complejizado para estas personas en el estado Bolívar. Higinio Montiel, de 28 años y líder del pueblo yekuana de la región del Caura, no se cansa de denunciar que la indiferencia del Estado y la corrupción está matando de mengua a su gente.

Estamos cansados de que el gobierno nos ignore y cuando exigimos la garantía de nuestros derechos nos maltrata y hasta nos detienen”, indicó Higinio, quien resalta que en tan solo el mes de mayo funcionarios de seguridad del Estado han detenido arbitrariamente a tres líderes sociales cuya labor siempre ha sido el reclamo de derechos para su pueblo.

INDÍGENAS ATACADOS

En una ocasión apresaron a un líder indígena que solo estaba llevando combustible para sacar de su comunidad a una persona en estado grave de malaria que tenía 2 semanas sin recibir tratamiento. “La escasez de gasolina nos ha aislado aún más y se nos hace imposible trasladarnos a centros de salud o a la ciudad para gestionar algún tipo de diligencia personal”.

Los militares acusaron a este líder de traficar gasolina, se la decomisaron y lo detuvieron por 72 horas, pero la verdad es que los indígenas del estado más extenso de Venezuela y rico, mineralmente hablando, se ven obligadas a comprar gasolina en el mercado negro o intercambiarla por alimentos o medicinas, que tampoco les sobra.

Los militares se aprovechan de la desesperación de nuestros hermanos, muchas veces los mantienen detenidos entre una semana y un mes, los golpean y los obligan a dar falsos testimonios. Mientras esto sucede, ellos ya tienen su negocio montado y revenden la gasolina decomisada a los mineros o grupos armados”.

“Llevamos más de cuatro meses sin saber qué hacer ante la desaparición total de la gasolina. Es terrible porque la necesitamos para trasladarnos sobre todo por vía fluvial ya que nuestra comunidad queda a siete días del centro, lugar donde vamos regularmente a hacer nuestras diligencias o cuando necesitamos atención médica especializada”.

Los líderes no son solo los que se encuentran angustiados por la represión y violencia que generan grupos armados del Estado e ilegales, también lo están las personas que no se relacionan directamente con las exigibilidades de derechos.

Silvia Delgado, la única enfermera que trabajaba en el ambulatorio tipo 1 de la comunidad pemón decidió irse tras los hechos violentos que ocurrieron en febrero entre indígenas y militares, donde varios hermanos fueron asesinados. Ella tiene mucho miedo de que le pase algo malo a alguno de sus tres hijos y decidió dejarlo todo y huir a Brasil”, dijo Endy Rodríguez, pemón y médico general del mismo centro asistencial.

La población pemón del municipio Gran Sabana de Bolívar, no ha recibido justicia tras el asesinato de cuatro miembros de su etnia en los ataques militares en la comunidad de Kumarakapay el 22 de febrero de 2019 y en Santa Elena de Uairén al día siguiente.¹

El abogado del Foro Penal, Olnar Ortiz, denunció que tampoco ha cesado la persecución y el temor de una nueva arremetida, lo que ha motivado a 966 indígenas de 14 comunidades de Gran Sabana a desplazarse a Brasil, esto lo hizo público durante la audiencia de seguimiento de las medidas cautelares a su favor y de los indígenas de San Francisco de Yuruaní convocada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) como parte del 172 periodo de sesiones en Kingston, Jamaica.

Solicitó ratificar las medidas cautelares a su favor y de la población de Kumarakapay, ampliarlas a todo el pueblo pemón del municipio Gran Sabana y extenderlas a las tres comunidades indígenas en territorio brasileño, entre ellas Bananal y Tarau, en las que se han refugiado los pemones venezolanos.

ENTRE ENFERMEDADES VIRALES Y PARÁSITOS

Las enfermedades que más atacan a la comunidad pemón y yekuana son la malaria, infecciones respiratorias, escabiosis, hipertensión, neuropatías, cuadros diarreicos, vómitos y parásitos. Los ambulatorios que están cerca de estos pueblos no cuentan ni con gasas, por eso sus habitantes se ven obligados a salir de sus tierras para que los atienda un médico, especialmente cuando ya su medicina ancestral no hace efecto.

Endy Rodríguez, médico residente de 26 años, trabaja sola y con las uñas para una población de más de

1860 personas. De todo falta en su ambulatorio. El último cargamento de medicinas llegó hace 2 meses, ahora solo le queda referir a los pacientes que no puede curar al hospital de Santa Elena de Uairén, a 45 minutos del pueblo.

Cada vez que le digo a una persona que no la podemos atender aquí en el ambulatorio por falta de medicinas se me parte el corazón. Sé que si la remito al hospital probablemente tampoco la atiendan, además de que deben gastar mucho dinero en el pasaje, cobran hasta 20 reales brasileños, que vienen siendo 30 mil bolívares por persona. Los choferes ya no aceptan bolívares”.

“Tener a una persona con alguna enfermedad grave dentro de la comunidad es angustiante porque no tenemos la facilidad de sacarlo del pueblo, pero lo más trágico es que cuando conseguimos llevar a un hermano al hospital es que nos digan que no lo pueden atender porque no tienen medicinas o que debemos antes comprarlas para que lo vean”.

En el mes de mayo murieron 5 individuos del pueblo yekuana entre niños, adultos y personas mayores, todos a causa de la imposibilidad de tratar adecuadamente sus enfermedades. “Cada día vemos cómo nuestros hermanos enferman, empeoran y mueren. A nadie le importa lo que sufrimos”.

VIDAS INTOXICADAS

La actividad minera ha desmejorado significativamente la vida de los pueblos indígenas y los que habitan a las orillas del río Caura lo saben de la peor manera. Además de constituir un megaproyecto extractivista impuesto por el Estado venezolano, cuya ejecución no fue consultada por los habitantes de la zona, se ha convertido en la principal causa de hambre y envenenamiento.

¹ Correo del Caroni: <http://www.correodelcaroni.com/index.php/ciudad/region/1971-denuncian-ante-la-cidh-que-966-indigenas-de-14-comunidades-de-gran-sabana-se-han-desplazado-a-brasil-por-persecucion>



“

Nosotros cultivamos la tierra para comer, así lo hemos hecho toda la vida. Sin embargo, el mercurio que procede de la actividad minera está contaminando nuestros alimentos. La siembra y los animales que comemos están envenenados por este químico y nosotros nos estamos envenenando también”, dijo Higinio.

Un estudio realizado por la fundación de salud brasileña Fiocruz, junto a la Asociación Yanomami Hutukara y la Asociación Yekuana APYB, revelan niveles alarmantes de mercurio entre los pueblos indígenas yanomami y yekuana.

“

Buscadores de oro ilegales están contaminando los ríos de los indígenas con el mercurio que utilizan durante el proceso de extracción del metal áureo. El mercurio entra entonces en la cadena alimentaria a través de las aguas del río que beben y de los peces que constituyen una parte fundamental de su dieta”.²

² <https://www.survival.es/noticias/11183>

Además de la contaminación alojada en cada alimento que consumen, estas comunidades se ven desplazadas por grupos armados que llegan a sus territorios exigiendo desalojo inmediato.

En muchos casos, doblegan a los indígenas y los mantienen haciendo actividades contra su voluntad. “Han llegado a secuestrar a nuestros hermanos para que les sirva de motoristas de las lanchas, esto les facilita a los grupos armados trasladar cargamentos sin la amenaza de que los detengan”.

“El Estado en vez de proteger nuestra cultura y territorios permite que grupos ilegales nos echen como perros de los lugares que hemos habitado por siglos”, denuncia Higinio quien tiene dos niños que desea que vivan tranquilos y aprendan las costumbres de su pueblo.



HUIR ANTES QUE MORIR

La desprotección estatal y el peligro que viven los indígenas gracias a las pugnas de las minas, ha generado que muchos de ellos huyan definitivamente de sus tierras y sin recursos se aventuren a cruzar fronteras.

Al menos el 25% del pueblo indígena sanema –también de la región del Caura - se ha ido de Venezuela. Muchos amigos de ese pueblo no han resistido más la crisis y han decidido marcharse solos o con sus familias buscando seguridad y mejores condiciones de vida”, comentó Higinio.

Endy forma parte del talento humano venezolano que se ve obligado a migrar para sobrevivir. Para ella la situación es insostenible y solo está esperando culminar su rural para irse a ejercer la medicina a Brasil.

Aquí lo que gano son 36 mil bolívares al mes, cuando un kilo de harina pan cuenta 28 mil. En Brasil me espera una tía que también es médico y me ayudará a entrar en un hospital.

Algunos no tienen la misma suerte que Endy en tener a alguien que los espera al otro lado de la frontera. Muchos otros indígenas no tienen recursos para llegar a Brasil y deben quedarse meses trabajando en condiciones precarias en otras zonas para conseguir el dinero que los llevará a su destino final.

NUEVE

VIOLENCIA CRIMINAL Y DE ESTADO CONTRA LAS MUJERES INDÍGENAS AL SUR DEL ORINOCO

Por **Andrea Pacheco**

La minería es una actividad masculinizada y en este contexto se producen formas de violencia y explotación dramáticas como: prostitución, trata de mujeres para las minas, trabajo semi-esclavo; migración forzada, femicidios, violencia en aumento, embarazo adolescente, entre otras.

La preminencia de las poblaciones indígenas del país retrata una distribución geográfica relacionada directamente con procesos extractivistas, tales como, el Arco Minero del Orinoco.

La conflictividad en esa zona se ha visto agudizada no solo por la Emergencia Humanitaria Compleja, sino por el plan macroeconómico del Estado que ha reconfigurado la explotación del territorio nacional, seccionándolo en las llamadas Zonas Económicas Especiales. Esto sumado a la implementación del plan denominado “15 Motores Económicos” que se formalizó en el año 2014 y que ha afianzado la lógica extractivista en detrimento de los bienes naturales y su explotación descontrolada.

Mundialmente, las condiciones de vida de las poblaciones indígenas y, muy particularmente, las de estas mujeres se inscriben dentro de ciertos patrones que acentúan las desigualdades y afectan de manera negativa los indicadores de mortalidad, educación formal, esperanza de vida, entre otros.

La necesidad de incluir la especificidad de la población femenina indígena en estos contextos, evidencia el enfoque de interseccionalidad, incluyendo la cosmovisión de las mujeres racializadas frente a un estereotipo universal en su carácter criollo/urbano. Esto configura la dinámica y las múltiples opresiones entre el sexo, el género, la clase, la raza y la orientación sexual que pesan sobre los hombros de las niñas, jóvenes y mujeres indígenas.

¹ Crónica Uno: De cómo se hunden los motores de la economía 12.06.2017 [en línea] <http://cronica.uno/de-como-se-hunden-mas-los-motores-de-la-economia/> Consulta del 16.06 al 22.06.19

Los avances en términos de marcos jurídicos y de reconocimiento de los derechos indígenas, así como la inclusión de los principios de la pluriculturalidad, multiétnicidad y multilingüismo en la Constitución de Venezuela, no han sido suficientes para la reivindicación efectiva de los pueblos originarios, lo que ha profundizado su situación de pobreza y discriminación.²

AMO: MUJERES, NIÑAS Y ADOLESCENTES

El creciente proceso de degradación ambiental producido por la puesta en marcha y profundización de proyectos extractivos en el territorio nacional, del cual el Arco Minero del Orinoco es un caso alarmante, está incidiendo de manera creciente y con diversos grados de intensidad sobre la calidad de vida de toda la población, especialmente de las comunidades indígenas, afectando directa e indirectamente su salud y condiciones de existencia.

Las comunidades indígenas venezolanas, que representan el 2,7% de la población (INE, 2011), participan intensivamente en la defensa de sus territorios y la preservación de sus entornos, constantemente asediados por complejos intereses.

No hay que perder de vista que varias de las principales causas del deterioro ambiental están determinadas por profundas inequidades sociales, económicas y de manera especial y acentuada por razones de género, en un contexto de emergencia humanitaria compleja.

Algunos testimonios recopilados para el informe Mujeres en Línea 2019 confirmaron la presencia de focos de explotación de oro en el cauce del Río Caroní.

“

No te tienes que ir al Dorado ni adentrarte al sur del estado Bolívar. A 5 minutos de la Alcabala del km 70 hay explotación minera, y lo que prolifera es la malaria, el dengue y las enfermedades” dijo Ana Páez, docente de 48 años.

Páez también explicó que en la zona no hay módulos de salud y que las mujeres deben trasladarse al menos una hora para llegar al centro asistencial más cercano ya que el Hospital Guaiparo fue clausurado por estar fuera de condiciones.

“El único hospital que tenemos los guayasitanos es el Hospital del Seguro Social y en Ciudad Bolívar”, indicó.

VIOLENCIA MILITAR Y PARAMILITAR CONTRA LAS MUJERES EN EL ARCO MINERO

En los últimos años, el sector militar (expresado en componentes de la FANB) se ha consolidado en la intervención directa e indirecta del proceso de extracción, procesamiento y comercialización del oro y demás minerales explotados en la región, en todas sus escalas.³

Con el decreto del Arco Minero se le otorgan poderes especiales a este sector para garantizar el pleno desarrollo de todas las actividades mineras y comerciales realizadas en la zona, a lo que habría que agregar el establecimiento de las minas como zonas de seguridad administradas directamente por el Ministerio de Defensa tal como lo establece el artículo 38 de la Ley de Exploración y Explotación del Oro (2015).⁴

La militarización del territorio del Arco Minero, decretado también como Zona Militar, no ha disminuido los niveles de violencia y la criminalidad en los estados que abarca. Más bien, es el Estado que actúa a través de una serie de imbricaciones entre el “pranato” y las fuerzas de seguridad, constituyendo lo que algunos investigadores han insistido en denominar “pranato minero”.⁵

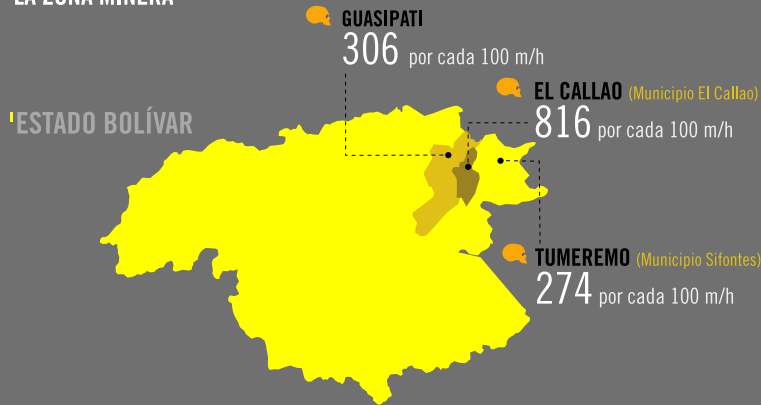
² Avesa. Informe Mujeres al Límite 05.2019 [en línea] https://avesawordpress.files.wordpress.com/2019/05/mujeres_limite_a4web.pdf Consulta del 16.06 al 22.06.19

³ Periódico El Libertario: Militares y pranes matraquean y controlan el tráfico del oro en el Arco Minero del Orinoco 12.06.2017 [en línea] 25.07.2018 <http://periodicoellibertario.blogspot.com/2018/07/militares-y-pranes-matraquean-y.html> Consulta del 16.06 al 22.06.19

⁴ Ley de Minas. <http://www.defiendete.org/html/de- interes/LEYES%20DE%20VENEZUELA/LEYES%20DE%20VENEZUELA%20II/LEY%20DE%20MINAS.htm>

⁵ Nuso.ORG (Romero, 2017). [en línea] https://nuso.org/media/articles/downloads/9.TC_Ruiz_274.pdf Consulta del 16.06 al 22.06.19

MUNICIPIOS CON MAYORES TASAS DE MUERTES VIOLENTAS CORRESPONDEN A LA ZONA MINERA

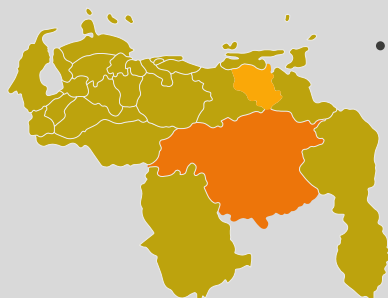


Entre 2012 y 2018 al menos 30 masacres fueron perpetradas en zonas mineras. Nuevos actores se suman a la trama de violencia como factores del Ejército de Liberación Nacional (ELN) contra quienes se han registrado enfrentamientos.

En los contextos de violencia aumenta considerablemente la de género como lo es el aumento de femicidios, violencia sexual, trata y explotación, entre otras. El Observatorio Guayanés de Violencia de Género reporta que en el estado Bolívar se registraron 28 femicidios durante el primer semestre del 2017, con un 40% de víctimas de edades comprendidas entre 13 y 21 años.

Es así como en 2018, la violencia contra la mujer aumentó en todo el estado Bolívar. De acuerdo con el 8vo y 9no informe del Observatorio de Violencia Armada con Enfoque de Género que preparó la Organización No Gubernamental (ONG) Comisión para los Derechos Humanos y Ciudadanía (Codehciu)⁶, entre enero y junio se suman un total de 14 femicidios en lo que va de año, concentrados en el estado Bolívar y Monagas con casos de violencia sexual y física y una mujer desaparecida. Los registros también señalan que hubo 5 víctimas de violencia sexual y abuso de autoridad por parte de efectivos del Estado, e incluso femicidios en grado de frustración.

EN 2018 LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER AUMENTÓ



• **Monagas** Su capital es Maturín y está ubicado en la región nororiental del país.

• **Bolívar** Su capital es Ciudad Bolívar y está ubicado al sureste del país.

Datos:
14 femicidios
estados Monagas y Bolívar

Formas:

- Violencia sexual y física
- Desapariciones
- Abuso de autoridad
- Uso de armas de fuego

Fuente: CODEHCIU

Aunque no existen datos discriminados por etnicidad respecto a la violencia de género y femicidio, podemos inferir que los contextos mineros son profundamente agresivos con mujeres criollas e indígenas. En el caso de las mujeres indígenas resulta aún más compleja la situación de violencia ante la poca posibilidad de acceso a la justicia y las herramientas para la denuncia.

DEGRADACIÓN DE LA VIDA DE MUJERES Y NIÑAS EN ZONAS MINERAS

La lógica devastadora del proyecto Arco Minero del Orinoco no se encuentra circunscrito solamente en la delimitación del territorio que establece el Decreto Nro. 2.248. La minería de pequeña escala está proliferando al sur del Río Orinoco, reproduciendo enormes desigualdades en los estados Bolívar y Amazonas.

Las actividades mineras realizadas en el territorio han producido constantes enfrentamientos entre las bandas armadas y de estos con las fuerzas de seguridad, conflicto motivado por el control de territorios. Muchos de los enfrentamientos han tenido lugar en las inmediaciones de las propias comunidades indígenas, desplazando y atemorizando a la población.

Recientes casos de asesinatos de indígenas en la comunidad pemón de San Luis de Morichal del municipio Sifontes y en la comunidad de Jivis en el municipio Sucre, hablan de la violencia estatal y paraestatal de la que son objeto estas poblaciones. Cabe señalar que los reportes suelen visibilizar solo las muertes masculinas, mientras que se hace poca referencia a casos de intimidación contra mujeres indígenas y abuso sexual.

Según la Organización de Mujeres Amazónicas Wanaaleru, en el informe Mujeres al Límite 2019, la violencia hacia las mujeres por motivos asociados a la actividad minera se centra en la construcción de poblados donde se instalan bares, casas de prostitución y ventas de comida controladas y administradas por los mismos trabajadores de la minería, quienes terminan haciendo negocios con fines de explotación sexual que derivan a su vez en altos índices de feminicidios y violencia territorial. Estos espacios de prostitución o currutelas, dominados por los agentes encargados para llevar los trabajos mineros, compran mujeres como cualquier objeto de uso diario con el fin de generar más ganancias en los negocios.

La mayoría de las mujeres compradas son niñas y adolescentes quienes son violadas, maltratadas y obligadas a involucrarse en actividades criminales por militares, mineros o grupos armados. Al mismo tiempo, las niñas y adolescentes que se encuentran obligadas en la vitrina de escogencia para intercambios sexuales o compra de esclavas son cambiadas por gramos de oro (entre 5 y 10), siendo las más pequeñas las más costosas, pues mientras más edad tenga la mujer será menos solicitada y por tanto, más económica.

CRIMINALIZACIÓN CONTRA MUJERES INDÍGENAS Y LUCHADORAS AMBIENTALES

En Venezuela a lo largo del año 2018 se registraron numerosos casos de intimidación, hostigamiento y omisión institucional contra mujeres indígenas lideresas de sus comunidades, y objeto de agresiones que van desde la difamación y acusación sin pruebas hasta el secuestro y tratos crueles. Los casos de mujeres indígenas que protagonizaron algunos de estos conflictos ambientales y/o territoriales fueron notables durante el año 2018, pero siguen estando invisibilizados por los medios de comunicación y las instituciones del Estado.

LIDERESAS INDÍGENAS AGREDIDAS U HOSTIGADAS DURANTE EL AÑO 2018

LISA HENRITO

FECHA Y CARACTERÍSTICAS DE LA AGRESIÓN

23 de julio 2018

Fue señalada de “traición y secesión” por un alto vocero militar en un programa por la televisora del Estado.

SITUACIÓN ACTUAL

Aunque la agresión fue duramente rechazada por el pueblo Pemón, el hostigamiento ha continuado y el gobierno no se ha retractado de los señalamientos.

MARY FERNÁNDEZ

FECHA Y CARACTERÍSTICAS DE LA AGRESIÓN

24 de noviembre 2018

Maestra Yukpa hija de la cacica Carmen “Anita” Fernández. Fue secuestrada y torturada por intereses relacionados a la ganadería en el estado.

SITUACIÓN ACTUAL

Fue liberada el 29 de noviembre y aunque la denuncia fue interpuesta todavía no se ha avanzado en la identificación de los responsables de este crimen.

LIDERESAS INDÍGENAS AGREDIDAS U HOSTIGADAS DURANTE EL AÑO 2018

CACICA CARMEN "ANITA" FERNÁNDEZ

FECHA Y CARACTERÍSTICAS DE LA AGRESIÓN

23 de noviembre 2018

La casa de Anita Fernández, cacica de Kuse en Sierra de Perijá fue saqueada y quemada y las reses de su propiedad fueron robadas.

SITUACIÓN ACTUAL

El caso permanece impune y sus pérdidas no fueron repuestas.



La minería es una actividad altamente masculinizada y en este contexto se producen formas de violencia y explotación dramáticas: prostitución; trata de mujeres para las minas; trabajo semi-esclavo; migración forzada; femicidios; violencia en aumento; embarazo adolescente, entre otras.

La amenaza de la proliferación de estas dinámicas en todo el país es sumamente peligrosa, generando afectación directa e indirecta en casi toda la población y el territorio. En esa dinámica de devastación niñas y mujeres llevan la peor parte, sin embargo, el estado las ignora. El esfuerzo por visibilizar estas realidades y asumir la denuncia como una causa urgente está en nuestras manos.

LUCIA ROMERO

FECHA Y CARACTERÍSTICAS DE LA AGRESIÓN

A lo largo de 2018

Su lucha por justicia en el caso del asesinato de su esposo Cacique Sabino Romero la ha llevado a una denuncia férrea que ha traído más muerte y represión a su familia. Durante 2018 denunció agresiones contra sus familiares y amenazas.

SITUACIÓN ACTUAL

Continúan sin procesar a los autores intelectuales señalados por la comunidad Yukpa. No hay medidas de protección para efectiva para Lucia ni su familia.

Fuente: Mujeres al Limite 2019

¿QUIÉNES SOMOS?

Amnistía Internacional, fundada en 1961 y presente en más de 150 países y territorios, es un movimiento global de más de 7 millones de personas e independiente de cualquier gobierno, ideología política o credo religioso.

Trabajamos en todo el mundo para luchar contra los abusos de los derechos humanos y para cambiar las leyes que en algunas ocasiones tratan de legitimarlos.

Nuestra visión es la de un mundo en el que todas las personas disfrutaran de todos los derechos humanos proclamados en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en otros instrumentos internacionales de derechos humanos.

Nuestra misión consiste en realizar labores de investigación y acción centradas en impedir y poner fin a los abusos graves contra todos los derechos humanos.

Nuestros principios son la solidaridad internacional, la actuación eficaz en favor de víctimas concretas, la cobertura universal, la universalidad e indivisibilidad de los derechos humanos, la imparcialidad e independencia, y la democracia y el respeto mutuo.

“

LA COMUNIDAD INTERNACIONAL NO PUEDE DAR LA ESPALDA A LAS VÍCTIMAS DE ESTA CRISIS SIN PRECEDENTES, TANTO DENTRO COMO FUERA DE VENEZUELA.

”

ERIKA GUEVARA ROSAS,
DIRECTORA PARA LAS AMÉRICAS DE AMNISTÍA INTERNACIONAL



PDV

LAS AMERICAS

www.amnistia.org